

CAPÍTULO IV

PATRIA, SOLIDARIDAD Y REDENCIÓN: LA PROTESTA OBRERO-SINDICAL

... que el hombre no proteste por la sopa en la cocina, que el hombre pelee por la sopa en la calle, porque el salir a protestar es conseguir mejoras para todos...

Don Julio, interlocutor

LA REFLEXIÓN SOBRE EL PAPEL de los trabajadores y sus organizaciones en la sociedad ecuatoriana se ha desvanecido de las preocupaciones de las ciencias sociales. De tal manera, un tema importante en la década de los ochenta ha sido suprimido al calor de la “lucha discursiva”¹, que, como dice Jameson, siguiendo a Stuart Hall, no es el “conflicto ideológico total, sino el control de los términos y reglas del discurso a través de la desacreditación de alternativas económicas, sociales y políticas tornando inmencionables determinados tópicos temáticos” (Jameson, 1999: 189).

Y es que el tema del trabajo, la reivindicación y la organización laboral realmente se ha tornado “inmencionable”, en virtud de que “el orden del discurso” ni siquiera ha canonizado a íconos substitutos (digamos, por ejemplo, al más neutral “trabajadores”), como sí lo ha hecho para el caso de la representación de otras fuerzas sociales que se han opuesto a la instauración del modelo de ajuste estructural, como hemos visto en los capítulos anteriores. Decíamos también que el visualizar nuevos desdoblamientos antes obliterados de los sujetos, a la larga, ha-

¹ Un compendio relativamente tardío sobre el tema fue publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Cuenca, y data de 1991. La publicación fue producto de un Seminario Internacional sobre “Pensamiento y práctica del movimiento obrero latinoamericano y ecuatoriano en los años ochenta y sus perspectivas en la próxima década” (Achig, 1991).

bía permitido un enriquecimiento de la discusión. Tal visibilización permitiría, ahora, ver al campesinado más claramente a través de la profundidad de sus autoidentificaciones étnicas, cuando las hay, y al estudiante en los avatares de su cotidianidad y en lo insondable de sus aspiraciones personales y afectos de “juventud”.

¿Por qué en este caso ni siquiera se ha operado la sustitución de “obreros” –icono fuertemente hermanado con el de “proletarios”– por otras imágenes? ¿Será, tal vez, porque el trabajo obrero, la organización sindical y su lucha, durante las tres últimas décadas y con todas las limitaciones que podamos identificar, se instalan en la encrucijada de las controversias políticas en torno al modelo de sociedad que unos y otros desean, así como en el corazón de aquello que está en disputa: la estructura de la producción?

En ausencia de una preocupación desde las ciencias sociales por los procesos actuales de las relaciones capital-trabajo, las luchas político-sindicales y sus expresiones simbólicas, serían los propios trabajadores quienes realizarían un esfuerzo de reflexión en torno a la problemática social y política en la que estaban inmersos. Podemos citar, en ese sentido, el texto de Narváez (et al. 1996), *Los encadenados del oleoducto*, o de Fausto Dután, “Situación y perspectivas del movimiento sindical y popular” (citado en Narváez et al., 1996).

El presente capítulo es un esfuerzo por reintegrar esa temática a la discusión de las ciencias sociales, limitándome aquí a esbozar ciertos aspectos de la trayectoria del Frente Unitario de los Trabajadores –y en particular en su expresión azuaya–, y de la Coordinadora de Movimientos Sociales, instancias que han sido las fuerzas motrices de la protesta sindical en las dos últimas décadas. Dado el vacío analítico señalado, el tratamiento del problema no está actualizado, por lo que esta contribución contiene más preguntas que respuestas, y sus conclusiones son provisionales.

Aunque para muchos/as el tema del movimiento sindical es un tema extinto, asumo como punto de partida inicial que el tema continúa tan vigente como hace quince años. Y esto obedecería a que la presencia pública de los trabajadores, y particularmente de los sindicatos, ha marcado la década de los años noventa, aun cuando de una manera muy diferente a la huella dejada en los setenta y ochenta, y también de un modo distante de la acción política y la protesta del sujeto campesino indígena, en lo que a los repertorios de lucha y demandas se refiere. E inclusive más: durante un tiempo significativo, la protesta sindical habría constituido uno de los segmentos más importantes de la conflictividad social, a pesar de la fragmentación interna por la que ha atravesado durante los años noventa la movilización sindical. Así pues, comprender esa presencia contribuye a la comprensión de

un fenómeno de envergadura de la historia contemporánea de nuestro país. Lo dicho puede ser corroborado al observar las estadísticas de la conflictividad social. Por ejemplo, en el Gráfico 3 (y en la Tabla III del Anexo), evidenciamos la alta incidencia de los reclamos laborales en varios períodos: en el que va de noviembre de 1996 hasta junio de 1999, la movilización de los “trabajadores” es particularmente elevada, mientras que la de los sindicatos se acentúa en el período de marzo a junio de 1999, correspondiendo muchas de estas exigencias a demandas salariales, lo que tendría que ver con el intenso deterioro de los ingresos de la gran mayoría de la población, incluidos sectores como el funcionariado de las misiones diplomáticas en el exterior. Debo anotar además que, comparativamente, sus manifestaciones de descontento superan notablemente a las de otros sujetos colectivos, declinando solamente en el lapso de marzo de 2000 a junio de 2001, cuando es superada por la incidencia de la movilización indígena.

Entonces, “el movimiento obrero no es una fuerza histórica en extinción”, a pesar de que indudablemente “perdió [...] su brillo ligado al imaginario heroico del proletariado” (Vakaloulis, 1999). Y es en tal condición que el sindicalismo ecuatoriano ha procurado mantener una capacidad de respuesta a las presiones por la modificación radical de las reglas de juego económico y del contrato social basado en la desigualdad que trae consigo la instauración del modelo neoliberal². Por ejemplo, aún a inicios de 2005 las dirigencias de las centrales sindicales intentan negociar con el gobierno aumentos salariales, empero su dispersión ha conferido a las acciones un carácter meramente táctico, es decir, una inscripción en la lógica política del adversario y una dificultad para revertir la situación. Veo esta fragilidad política, más que como un motivo para el abandono del tema, como un llamado de atención de los/las analistas para la reflexión sobre lo que estaría aconteciendo en el seno de la relación capital-trabajo, sobre las transformaciones de la esfera de la producción, sobre las modalidades de organización y el programa adecuado a las mudanzas políticas mundiales y de la tecnología, así como sobre las identidades sociales en ellas gestadas.

¿Cuál sería, entonces, el carácter de la presencia de los trabajadores, cuáles los ribetes ideológicos de la protesta desde mediados de los años noventa? ¿Cuál sería la incidencia de los obreros sindicalizados en el proceso de la aceleración del ajuste? Sobre la significación de esta lucha podríamos también formular otra interrogación igualmente crucial, que se proyecta más allá de la ideología y atañe al impacto que tales

2 ¿“Podemos imaginar”, se pregunta un sindicalista, “la amplitud que tomaría este fenómeno [de la exclusión] si los asalariados cesaran de luchar por su empleo, por sus salarios y sus condiciones de trabajo?” (Rozet, Pierre-Jean et al. en Vakaloulis, 1999).

expresiones tuvieron en la reconfiguración del mapa de las relaciones sociales: ¿Se trata de luchas exclusivamente laborales y/o “economicistas”, de reivindicaciones sectoriales, o de una lucha de carácter contrahegemónico que apunta contra la instauración de un modelo basado en la “precarización de la sociedad”³?

Nuestro propósito central aquí es analizar el tema de la protesta en la provincia del Azuay, las representaciones sobre la sociedad en tiempo de ajuste, así como las prácticas y cultura de agremiación. Sin embargo, es imposible sustraerse de la novedad organizativa de los años noventa, la Coordinadora de Movimientos Sociales, cuya lucha descolló con caracteres peculiares en la ciudad de Quito; por ello se incluye un breve esbozo analítico sobre este punto con miras a cotejar con los contenidos ideológicos de la constelación azuaya.

A contrapelo de las aseveraciones corrientes de que la protesta se habría mantenido en los marcos estrechos de las reivindicaciones “obreristas”, sugiero que, independientemente de la radicalidad de los discursos sindicales oficiales y del “economicismo” de sus bases, la fusión de dichos reclamos con la condena a las políticas de Estado en el plano de la implementación del ajuste habría producido un “corporativismo universalista” que logró expresar y representar las aspiraciones de amplios sectores sociales: pobladores, campesinos, estudiantes, así como de una vasta gama de sectores medios vinculados a la cobertura social del Estado, pugnando por preservar cierto acceso a los derechos de ciudadanía social alcanzado durante la década de los ochenta.

La hipótesis central de este capítulo es que la protesta es promovida desde una lucha por la ciudadanía inspirada en el “corporativismo universalista” (desplegado en contextos simbólicos específicos durante los años ochenta, y desde mediados de los años noventa). Es decir, la ideología de la protesta no sería “clasista” *strictu sensu*, aun cuando estaría expresando un antagonismo fundamental. En los años ochenta, la ideología del corporativismo universalista y sus identidades (identidades “demandantes”, en los términos de Calhoun, 1994) se habrían tejido en torno de los relatos de la lucha de clases y el “pueblo ecuatoriano”. Ya en los años noventa, y sobre todo hacia mediados de la década, “la nación” y “la patria” se convierten en los relatos eminentes que permiten la construcción de identidades en torno al “espíritu del Alto Cenepa”⁴ (Ibarra, 1997). Construcción, por cierto, muy engarzada en las contratendencias de la globalización (Hall, 1997); y no solamente en el sentido de la eclosión de las particularidades étnico-nacionales,

3 “Precarización de la sociedad”, concepto usado por Vakaloulis (1999).

4 En alusión a la confrontación bélica que sostuvieran Ecuador y Perú en 1995 en un tramo de la frontera amazónica de ambos países.

sino también del repudio a las políticas de ajuste, es decir, de una demanda tanto de “reconocimiento” como de “redistribución” frente al Estado nacional. Tales reivindicaciones se afianzarían en las expresiones de pertenencia a la “comunidad imaginada” y, a partir de ello, en nociones y sentimientos de pertenencia ciudadana⁵. Por otra parte, las identidades construidas en los relatos de la lucha de clases y del pueblo resultan fracturadas en el contexto de la lucha discursiva de los años noventa, mientras que aquellas que se articulan en el relato de la nación habrían tenido eficacia para sustentar la resistencia a la aceleración del ajuste, aunque sin lograr exorcizarlo.

La argumentación se sustentará en el análisis de las representaciones de un grupo de obreros (ahora, en realidad ex obreros) sobre la sociedad ecuatoriana y su época, en la comprensión de las identidades cristalizadas en los últimos años. Aprovecho, asimismo, para tejer unas cuantas apreciaciones en torno del proceso político de los años setenta y ochenta a modo de contextualización, así como para ensayar la comprensión de los procesos ideológicos que lo sustentaron, en tanto referentes fundamentales de las identidades constituidas en la protesta. El análisis ha sido basado en los testimonios de trabajadores comprometidos con la construcción sindical en la ciudad de Cuenca desde hace varias décadas, y en un diálogo con un ex alto dirigente nacional de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT). La dispersión de las antiguas organizaciones obreras impidió dialogar con sus miembros de base, pues gran parte de ellos ha marchado al exilio económico, a países como los Estados Unidos, España e Italia. Empero la palabra recuperada es, en gran medida, la palabra legitimante y no la “palabra legítima” (siguiendo la conceptualización de Bourdieu), pues, a pesar de que se trata de ex dirigentes de instancias provinciales, su voz y decisiones habrían sido más bien marginales frente a las grandes decisiones centralizadas adoptadas en la ciudad de Quito, lugar al que nuestros interlocutores eran convocados por la eventualidad de congresos y asambleas. Recupero, asimismo, la información recogida en la participación en marchas de protesta durante el año 2002, y en la Asamblea Cívica Nacional del 21 de marzo de 2002, que delinearía las pautas para la realización del “Paro del Pueblo” en contra de la privatización de las comercializadoras de energía eléctrica⁶.

Inicialmente ofrezco al/la lector/a un esbozo del proceso político del sindicalismo ecuatoriano en las décadas del setenta y sobre

⁵ Considero que es en los años noventa cuando ciertos sectores de trabajadores sindicalizados construirían identidades ciudadanas, al afianzarse “la ecuatorianidad” como referente.

⁶ Evento que no fue realizado, en la medida que el gobierno de Gustavo Noboa suspendió la venta de esas empresas estatales.

todo del ochenta, como pauta de confrontación que permitan entender las mudanzas en los años noventa. A continuación, presento un breve análisis de las tradiciones culturales que habrían incidido en la configuración ideológica más reciente. Luego me adentro en la exploración de las experiencias de los obreros sindicalizados (o ex obreros, para mayor precisión) y, al fin, en los códigos de la politicidad de su protesta en los años noventa.

HERENCIAS (E INERCIAS) CULTURALES

Edward Palmer Thompson ha alertado sobre la explicación reductora del surgimiento de la clase obrera inglesa como resultado de la revolución industrial y, particularmente, del florecimiento de la industria textil. Ese autor sugiere considerar la formación de la clase obrera a partir de “ingleses libres”, modelados por los metodistas, herederos de los derechos tradicionales de las villas, de las nociones de igualdad ante la ley, de las tradiciones artesanales, indoctrinados macizamente por la religión, y creadores de tradiciones políticas (Thompson, 1987, t.2: 17-18).

En un sentido que rescata dicha observación del historiador inglés, planteo que al hablar *grosso modo* de una tendencia clasista del sindicalismo que se configuraría hacia la época del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, se olvida la vigencia de las tradiciones y las inercias culturales, pues la ideología corporativista tiene hondas raíces en el sindicalismo ecuatoriano, y persiste tanto a merced de la composición social y étnica del sector de los trabajadores, como de sus prácticas en los microespacios y en las instancias gremiales. (Y hablar de “corporativismo” o de “neocorporativismo” no tiene aquí un sentido peyorativo, pues es preciso considerar las incidencias de la protesta social inspirada en tales constelaciones ideológicas). En las páginas que siguen propongo explorar los orígenes de las prácticas e ideología corporativistas dentro de la vertiente sindical “clasista”, en particular, en organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), y en su momento también de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS).

Para comprender el proceso sindical ecuatoriano, cuya presencia pública se fortalece desde inicios de los años setenta, conviene partir de la distinción que realiza Enrique de la Garza Toledo entre “sindicalismo clasista” y “sindicalismo corporativo”, dos tipos de sindicalismo que se habrían conformado en América Latina durante el siglo XX. El sindicalismo de primer tipo, el clasista, habría seguido las pautas de la lucha de clases, bajo la influencia del marxismo-leninismo y, en casos como el boliviano, del trotskismo; la presencia de esa vertiente habría estado definida, primordialmente, por su actuación como fuerza política para la definición de políticas estatales, antes que como factor

de las definiciones de las relaciones laborales a nivel de la empresa. El sindicalismo del segundo tipo, el corporativo, a su vez, habría existido más en su subordinación al Estado –inicialmente al populista y luego al desarrollista– que a las empresas, en la trama de las relaciones capital-trabajo, inscribiéndose en los modos de funcionamiento de la intervención estatal en la economía a través de la intermediación de los intereses y la participación en la gobernabilidad, de manera institucional o informal; de modo que la “gobernabilidad corporativa” habría implicado, en primer lugar, participar como diseñador o aval de políticas económicas, laborales y sociales y, en segundo lugar, evitar que los conflictos interclasistas transpusieran los límites de la gobernabilidad (De la Garza Toledo, 2001: 10-11).

En el caso ecuatoriano no podríamos observar un corte nítido como el sugerido por Enrique de la Garza entre los dos tipos de sindicalismo, pues si bien es cierto que existe una corporativista configurada, en el caso de la vertiente actuante bajo la égida de las formulaciones doctrinarias izquierdistas y el lema de la oposición a las políticas de Estado resulta insuficiente definirla como “clasista”, pues considero difícil sugerir la vigencia plena de una ideología “clasista” aun en el momento de mayor despliegue de la lucha obrera, durante los años setenta y ochenta, cuando las vertientes socialistas predominan en el seno del movimiento sindical y este se convierte en polo activo de resistencia política a las presiones por el ajuste en los años setenta, y a la paulatina implementación del mismo durante los ochenta.

La persistente ideología corporativista estaría vinculada a los orígenes de la organización sindical que, como toda la sociedad ecuatoriana, entre principios del siglo XX y los años sesenta –acentuadamente– se ve obligada a lidiar con las herencias de la colonialidad. Así, siguiendo a León Trujillo (1991: 185), apuntamos que una de las contribuciones del sindicalismo habría sido promover el reconocimiento social del/la trabajador/a portador/a de una marca étnica, en el contexto de una sociedad rural con enclaves urbanos en los que se emplazaba la incipiente industria, y se comercializaban los productos de la artesanía. De lo que se trataba, entonces, es que el trabajo manual, otrora visto como una condición propia del indígena y por lo mismo despreciable, adquiriese una valoración social. En lo que concierne a quienes realizaban dicho trabajo manual, lo que se pretendía era que ganasen derechos (incluida la ciudadanía); así, “el sindicalismo marcará un distanciamiento, un estatus diferente para el obrero de la condición indígena, aunque sus orígenes mediatos sean estos. [...] El obrero se volvía tal adquiriendo su estado de mestizo, es decir distanciándose de lo indígena” (León Trujillo, 1991: 185). En razón de tal circunstancia, los sindicatos en su origen se habrían configurado

como corporaciones de defensa y de ventajas de una minoría asalariada (León Trujillo, 1991: 185).

De esa manera, una marca específica del sindicalismo ecuatoriano habría sido la imbricación entre la problemática de clase, en términos salariales, con la problemática étnica, en términos de una igualdad basada en la asimilación al mundo mestizo-urbano. El tema del llamado “corporativismo”, por tal motivo, sería inseparable de este entrelazamiento entre las dimensiones clasista y étnica.

PARADOJAS POLÍTICAS

Otra importante peculiaridad del sindicalismo ecuatoriano, junto con la fusión de lo “clasista” y lo “étnico”, sería la variopinta composición social de las organizaciones. Durante la primera mitad del siglo XX los sindicatos reunían en su seno tanto a obreros/as industriales como a artesanos/as, y la presencia de estos/as últimos/as significaba la presencia tanto de los maestros como de aprendices y oficiales. Tal diversidad habría estado presente aun en la Confederación de los Trabajadores del Ecuador⁷, así como también en la “Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres” (CEOSL) afiliada a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) organizada en 1962 (León Trujillo, 1991: 182). Por lo demás, durante décadas, una de las funciones de cierto sindicalismo será la de contrarrestar la influencia de las corrientes socialistas de pensamiento, siendo este el caso de la Confederación de Organizaciones Católicas del Ecuador (CEDOC) fundada por la Iglesia Católica en 1938.

Durante los años setenta, en el contexto del desarrollo capitalista industrial, la integración al mercado mundial y el advenimiento de la era del petróleo, crece el número de los trabajadores asalariados, y se produce el tránsito del sindicalismo de oficios al sindicalismo industrial y de servicios (Ycaza, 1991: 314). Cada central, sin embargo, mantendría sus especificidades en cuanto a la composición social, por ejemplo, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) habría estado mayoritariamente formada por obreros manufactureros, mientras que en la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) confluían los trabajadores de las empresas públicas de servicios, y en la Central Ecuatoriana de Organizaciones Católicas (CEDOC) predominarían los trabajadores rurales, cubriendo así “la heterogeneidad del mercado de trabajo, o más precisamente la diversidad de condiciones de

⁷ Al nacer la CTE en 1944, su organización incorpora tanto pautas clasistas y experiencias de conflictos laborales y huelgas, combinándolas con una composición social “heteroclita”: choferes, empleados del comercio, vendedores ambulantes, lustrabotas, “escritores y artistas”, dueños de joyerías, sastres, etcétera (León Trujillo, 1991: 182).

trabajo, tanto en el sector rural como en el urbano (campesinos, obreros agrícolas, obreros industriales, empleados, trabajadores, informales, artesanos, etcétera)” (León Trujillo, 1991: 187).

En la misma época las centrales sindicales entonces existentes: las ya nombradas CTE, CEOSL y CEDOC se fundieron en el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), con el propósito inicial de enfrentar las políticas antiobreras de los gobiernos de entonces. Por otro lado, tanto en la CEDOC, como en la CEOSL se inició un claro proceso de “conversión” clasista o, más exactamente, se consolidó el predominio discursivo público de los tópicos socialistas, sin que hayan sufrido alteraciones radicales la composición social básica ni las tradiciones culturales en las que estaban inmersos los miembros de las organizaciones. En el curso de estos procesos, la CEOSL cuestionó su filiación a la CIOSL y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), bajo cuya égida nace la central en el Ecuador. Mientras tanto en la CEDOC, de raíces católicas, la corriente socialista logró prevalecer y ganar supremacía política por sobre las orientaciones demócrata cristianas, lo que llevó a la ruptura de la central, una de cuyas alas continuó perteneciendo a la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), mientras que la otra adhiere al FUT y, manteniendo las siglas, resaltó su orientación clasista denominándose Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (y en lo posterior CEDOCUT, Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores).

Tras la unificación del sindicalismo denominado “clasista” y la preponderancia política de las dirigencias de izquierda advino, asimismo, una época de alto protagonismo político, expresado a través de varias huelgas nacionales, en las que se unificaron los diversos intereses sectoriales de los trabajadores con los de otros sectores populares, logrando diluir la heterogeneidad reivindicativa en las demandas consensuales planteadas al Estado.

Hagamos un breve paréntesis para recordar cuáles fueron esas reivindicaciones unificadoras del FUT: en noviembre de 1975, en apoyo al reformismo militar de Rodríguez Lara⁸. En mayo de 1977, contra

8 Según Pérez Sáinz, en las políticas del gobierno militar reformista de Guillermo Rodríguez Lara la dimensión estatista habría ocupado un lugar privilegiado, al pretender que “el Estado asumiese el papel de capital colectivo para lograr la constitución del capital global” (Pérez Sáinz, 1985: 55). Tras cinco años de esfuerzo, el gobierno militar habría logrado que del 12% del presupuesto general del Estado destinado a la generación de medios colectivos de producción en 1970, este rubro ascendiese al 20% en 1975; también las erogaciones en medios colectivos de consumo se incrementan, situándose en el 59,5%; también habrían resultado beneficiadas las instituciones del sistema financiero, por ejemplo, el Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE), institución que habría destinado más de la mitad de su presupuesto, proveniente de las rentas petroleras a la construcción de infraestructura y a la financiación de la Refinería de Esmeraldas. Sin

las medidas económicas del Triunvirato Militar. En mayo de 1981 en contra del alza del precio de la gasolina y la elevación de las tarifas de transporte dictadas por el gobierno de Jaime Roldós⁹. En diciembre de 1981, contra la elevación del precio del azúcar realizada por el gobierno del demócrata cristiano Osvaldo Hurtado¹⁰. En septiembre y octubre del año siguiente, en contra de la elevación del precio de la gasolina y de la devaluación del sucre, respectivamente, impuestas por el mismo gobierno demócrata cristiano; a la movilización de octubre se le denominó “I Paro Nacional del Pueblo”¹¹. En marzo de 1983, en contra de las medidas económicas dictadas por el gobierno de Hurtado Larrea. En la época del ultraderechista Febres Cordero se realizaron seis huelgas nacionales: en la primera de ellas, en octubre de 1984, el FUT se pronuncia en defensa de la democracia; en otra, de marzo de 1985, el FUT y el Frente Popular de orientación proalbanesa presionan conjuntamente por el alza salarial; en septiembre de 1986 se realiza el II Paro Nacional del Pueblo, en contra del autoritarismo y el costo de la vida, participaron el Frente Unitario de los Trabajadores (cuyas dirigencias eran de orientación socialista y comunista prosoviética), el Frente Popular (de orientación proalbanesa), la CEDOC-CLAT (demócrata cristiana), sumándose las organizaciones indígenas *Ecuarrunari* y la recientemente formada Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Y, por último, en octubre de 1987 el FUT y las organizaciones indígenas nombradas se alzan en contra del autoritarismo¹². Las movilizaciones de la época del gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, y las realizadas durante la

embargo, estos esfuerzos, tanto como la reforma agraria habrían producido la hostilidad de los terratenientes, la ofensiva del capital foráneo y las demandas empresariales de libre competencia, respeto a la propiedad privada y a la libre empresa formuladas por León Febres Cordero (Pérez Sáinz, 1985: 55-57).

⁹ Lo que permite encuadrar estas acciones dentro de la corriente clasista es la denuncia de las medidas como determinadas por compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y la acusación al gobierno por el abandono de las propuestas de cambio y “contubernio” con la oligarquía; se demanda también la salida del Instituto Lingüístico de Verano, acusado de “agencia de penetración cultural que trataba de controlar a las organizaciones campesinas e indígenas” (Ycaza, 1991: 322-323).

¹⁰ Huelga que no habría resultado exitosa, aun cuando se habría paralizado una parte significativa de la producción (Ycaza, 1991: 324).

¹¹ Las medidas diseñadas habrían obedecido a un programa de estabilización económica impuesto por el FMI y el Comité de Gestión de los Bancos Extranjeros como condición para renegociar la deuda; las medidas contemplaban la liberación de divisas provenientes de las exportaciones y la adopción de un sistema de cambio múltiple del dólar. Los efectos de las medidas provocaron el descontento de diversos sectores de la población, cuya movilización fue intensa entre septiembre y octubre de 1982 (Ycaza, 1991: 326).

¹² Sobre el tema de las huelgas nacionales de los años setenta y ochenta, ver más extensamente León Trujillo (1991: 192), Ycaza (1991), así como Pérez Sáinz (1985).

presidencia de Sixto Durán Ballén –cuya gestión hemos caracterizado como preludio de la intensificación del ajuste– aún esperan la atención de los/las estudiosos/as de la sociedad y la cultura (y es también por ello que la reflexión sobre la movilización obrero-sindical continúa vigente como tema de la historia contemporánea de nuestro país, como parte de nuestra memoria reciente, más allá de las modas de las ciencias sociales o de las interdicciones).

Prestemos atención a la fuerza del componente político de las huelgas nacionales de los años ochenta: desde las huelgas “económicas” de 1982-1983, su carácter se modifica, a mediados y finales de los ochenta, cuando los pronunciamientos impugnan el autoritarismo. Y este momento se puede considerar estelar, no solo por la magnitud de las movilizaciones populares, sino también porque el sindicalismo de signo clasista parece haber plasmado su madurez a través de la tan anhelada unidad de sus diversas corrientes. Sin embargo, ni entonces se logró contrahegemonía, y las políticas de ajuste continuaron en el cauce trazado por las elites económicas y sus gobiernos. Por otro lado, la huelga como principal forma de lucha parece haberse desgastado, ya que “los logros obtenidos a través de las distintas huelgas no han sido muy significativos (básicamente alzas salariales y cierta estabilidad laboral)” (Pérez Sáinz, 1985: 196).

Considero, no obstante, que muchos de los logros obtenidos en las sucesivas huelgas habrían beneficiado a amplios sectores sociales en vías de empobrecimiento, “el pueblo” (por ejemplo, la manutención de los precios del gas, de los pasajes, de los productos básicos de la canasta familiar o de los servicios estatales). Durante la época, el relato sobre “el pueblo” habría constituido el referente central de las identidades sindicales, a partir de la permanente confrontación con el Estado; la idea de “clase” como eje de las identidades sindicales, habría estado diluida en la jerárquicamente superior noción de “pueblo”. Es por estas razones que he llamado a la ideología que ha sustentado la protesta de las últimas décadas del siglo XX, “corporativismo universalista”.

Tras las numerosas (seis) y combativas huelgas del período febrer-corderista (1984-1988), declina la capacidad de convocatoria del FUT y sus instancias aliadas –como el Frente Popular vinculado al Movimiento Popular Democrático–, y se acentúa cada vez más, al internarnos en la década de los años noventa, “la ausencia de un proyecto alternativo al neoliberalismo” (De la Garza Toledo, 2001: 22).

Intentemos comprender los entretelones de este descenso, examinando algunos factores tanto endógenos como exógenos.

Los factores endógenos se tornan perceptibles, al adentrarnos más allá de las superficies de las declaraciones políticas inspiradas en la doctrina socialista, y al indagar más allá de la presencia sindical al-

tamente politizada en el ámbito público. Lo que observamos son fisuras internas y efectos políticos adversos, emanados del tipo de relación con la sociedad, siendo lo más relevante, en este sentido, la autonomía de las dirigencias respecto de las bases (León Trujillo, 1991).

Una segunda fisura sería el bajo peso socio-económico de las centrales sindicales, debido a que la mayoría de los trabajadores asalariados no se encontraba sindicalizada. Así, los niveles de sindicalización hacia final de los años ochenta sería entre el 18 y el 22% (en la época, las leyes laborales establecían un mínimo 15 trabajadores por lugar de trabajo para formar un sindicato, no era posible la sindicalización individual) (León Trujillo, 1991: 195).

En tercer lugar estaría la irregular incidencia política sobre la sociedad, pues, a pesar de la presencia permanente del sindicalismo clasista como factor de presión, la presencia de las centrales sindicales era variable, y estaba ligada al ciclo electoral. En los momentos electorales, los partidos de todo el espectro político competían fuertemente con las centrales sindicales, restándoles capacidad de convocatoria, y ahondando las discrepancias entre dirigencias que seguían las posiciones de sus partidos (de una izquierda fraccionada). Solo en los períodos poselectorales, cuando los partidos tomaban posesión de los asuntos del Estado, la dirigencia sindical unificada recuperaba la capacidad de liderazgo opositor, capitalizando el descontento de amplios sectores, al calor del conflicto social (León Trujillo, 1991: 198).

Por último, la relación con el Estado sería, paradójicamente, la mayor fuerza y la mayor debilidad del sujeto sindical. En esta relación, las organizaciones obreras se sitúan en una condición subalterna y heterónoma, pues, como apunta León Trujillo, sería el conflicto lo que hace posible que el sindicalismo se haya mantenido “en la cresta de la ola” de la oposición política durante más de una década. A su vez, sería la conflictividad detonada lo que lo llevaría a inscribirse como parte del sistema político; literalmente, “no hay cabida a un sindicalismo a-político” (León Trujillo, 1991: 189-196).

En todo caso, es el apuntalamiento desde lo político lo que ha conferido potencia a una fuerza social que de otro modo tendría una presencia menos visible. Por paradójico que parezca, es posible que esta hiperpoliticidad concentrada en la relación con el Estado haya llevado a descuidar la elaboración de contrapropuestas de modelo societal en el momento de la ofensiva neoliberal, afectando el tratamiento de “parcialidades”, tales como la profundización de la unidad, la búsqueda de alianzas político-sociales más consistentes y paritarias en el seno de la pluralidad opositora, el abordaje sostenido del tema de la reestructuración productiva y la “resistencia-adaptación” a las nuevas condiciones, las relaciones obrero-patronales en los nuevos contextos. Me pregunto

si realmente tal “hiperpoliticidad” habría dado cuenta del antagonismo central de la época, no tanto desde el punto de vista del discurso y el diagnóstico histórico, cuanto desde la perspectiva del diseño de estrategias políticas. La hiperpoliticidad, por lo mismo, podría haber bloqueado la producción de adhesiones sociales durante los años noventa, en el justo momento en que el sindicalismo se convertía en blanco de la ofensiva neoliberal, sin un relato adecuado que justificase su existencia, condenándose a actuar en un plano heterónomo, táctico. Además, el último decenio del siglo XX fue la época de exaltación de las virtudes del apoliticismo, cuando las opciones electorales “independientes” ganaron el derecho a la representación de la sociedad y, como veremos, una de las corrientes sindicales abonó el terreno de este discurso desde una posición “post-partidaria”. El contexto de saturación con lo “partidario”, indudablemente, fue desfavorable para la dinámica sindical.

La heteronomía se haría extensiva, obviamente, también a la vertiente sindical de signo democristiano, pues también ella estaba marcada por el estadocentrismo, en una línea corporativista, llamémosla, “estadólatra”, a diferencia de la “estadofobia” y el corporativismo universalista de la vertiente de izquierda.

Entre los factores de orden externo del declive, frecuentemente se ha atribuido la desmovilización del sujeto obrero-sindical a las políticas de Estado y a las modificaciones de la legislación laboral, particularmente a las realizadas durante el período del gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja, la más importante de las cuales habría sido la entrada al régimen de tercerización y flexibilización de la fuerza laboral. Considero, sin embargo, que hubo un preludio fundamental: el consenso antisindical, que habría preparado el suelo ideológico para las transformaciones económicas y jurídicas en los órdenes productivo y laboral. Se trata de la mencionada “lucha discursiva”: el control de los términos y reglas del discurso. Y es así que se emprende una ofensiva en contra de todo sindicalismo, a través del desprestigio –que se acentúa tras los sucesos mundiales de 1989–, campaña en la que tuvieron un papel primordial los grandes medios de comunicación (que, dicho sea de paso, a mediados de los años noventa permitieron cierta visibilización de la Coordinadora de Movimientos Sociales, en la medida que esta se presentaba como alternativa apartidaria –sin pecado original– al “dinosáurico” FUT).

Podríamos observar que mientras la ofensiva antisindical, desde el Estado, creaba un vacío discursivo en lo referente a la organización y el desprestigio de la protesta, el tratamiento de otras fuerzas sociales, tales como los campesinos y los estudiantes, operaba desplazando los tópicos reivindicativos desde la esfera política a la esfera de lo social-cultural y lo cotidiano-personal (“indígena”, en lugar de “campesino”,

y “joven” en lugar de “estudiante”). Diríamos que la reducción de la complejidad social de los sujetos sociales movilizados tenía como efecto el desvío de los núcleos de la representación a lugares sociales desde donde se podría minimizar los impactos de la contestación en los ejes del nuevo modelo de dominación societal, y no porque tales lugares sociales dejaran de ser aspectos estructurales de las relaciones de poder, sino por la fragmentación e ineficacia para cuestionar el modelo social impuesto que conllevaría la protesta al ser levantada únicamente desde ámbitos como, por ejemplo, la vida cotidiana o la lucha por el reconocimiento cultural sin redistribución. Tales desplazamientos parcialmente iban siendo apuntalados mediante políticas públicas que satisfacían, en algún grado, demandas latentes y legítimas, lo que generaba, al mismo tiempo, efectos de democratización e inclusive cierta mejora de la calidad de vida. Entre tales respuestas tendríamos, por ejemplo, la adopción de la legislación y la creación de una institucionalidad en defensa de los derechos humanos de las mujeres, y la atención a las demandas étnico-culturales, entre otras.

Las políticas antiobreras, mientras tanto, ganaban profundidad, y el sujeto sindical era convertido en antihéroe, al calor de la representación hiperbólica de la burocratización de las organizaciones y de los desatinos de sus cúpulas. La desesperación de las dirigencias frente a la ofensiva simbólico-discursiva del neoliberalismo ha sido expresada de manera dramática por Ramiro Galarza, dirigente de la CMS:

Los sindicatos estábamos solos, condenados por los ciudadanos comunes que no se interesaban por nuestras demandas y nos miraban por debajo del hombro. Tener un empleo es un privilegio en un mar de desempleados y hambrientos; la clase gobernante sabía de esto y lo manejaba con maestría, los pobres eran sus aliados (Galarza, 1996: 121).

LOS AÑOS NOVENTA ¿TINIEBLAS SIN AMANECER?

¿Cuál es la situación de la protesta sindical durante los últimos años del siglo XX? Los trabajadores, y en particular los sindicalizados, se encuentran en la década de los años noventa en una situación muy difícil para el desarrollo de su organización, pues, sobre todo, pierden la capacidad de convocatoria y de negociación frente a los gobiernos. Este fenómeno de debilitamiento y crisis tendría un alcance latinoamericano, y estaría situado en una fase específica de la transición democrática. Enrique de la Garza Toledo reconoce dos momentos de la transición democrática; en el transcurso del primero se habrían privilegiado las

políticas estatales e intervencionistas¹³, pero el segundo representaría “la fase neoliberal de transición de las dictaduras a la democracia política” (De la Garza Toledo, 2001: 9). Y este sería el marco histórico de la protesta obrera a partir de mediados de los años noventa.

Entre los factores que habrían contribuido al declive de los sindicatos estarían, según el mismo autor, las políticas de ajuste y cambio estructural continuadas en los años noventa como reformas de segunda generación, a través de: la venta de las empresas paraestatales que impactarían con la reducción del empleo, la apertura de los mercados y la desregulación que presionarían a las empresas para implementar la flexibilización laboral; las políticas de reestructuración productiva y flexibilidad laboral con el mandato de cambios contractuales y modificación de la legislación laboral; y, por último, las políticas de combate a la inflación y su consecuencia de deterioro salarial, así como de reducción del gasto público que determinó la caída del gasto social (De la Garza Toledo, 2001: 15). De tal manera, en América Latina en su conjunto habría disminuido el porcentaje de empleos en la industria, puesto que creció el número de ocupados en el sector informal del 42,8% en 1990 al 46,4% en 1999.

Ya ha sido esbozado un perfil de las situaciones de orden político, interno y externo, que incidieron en el declive de la presencia obrera organizada en el Ecuador. Cabe señalar además algunas cifras que ayudan en la comprensión del caso ecuatoriano: el índice de empleados no agrícolas (de la zona urbana) en 1990 habría sido de 20,3%, reduciéndose hacia 1998 al 15,9%¹⁴ (datos de la OIT, citados en De la Garza Toledo, 2001: 16-17). Esta reducción habría tenido un impacto directo en la sindicalización, en la medida que la mayoría de los sindicalizados se encontraba vinculada al sector público y la industria (De la Garza Toledo, 2001: 15).

Por su parte, Fausto Dután, quien por muchos años fuera dirigente de la CEDOCUT y del Frente Unitario de los Trabajadores, en una entrevista concedida reconoció las limitaciones del movimiento obrero y sindical en cuanto a una estrategia “*que permita ir más allá de sus propias reivindicaciones*” (teniendo presente que tampoco éstas estarían actualizadas, dado que no se han contemplado, por ejemplo, demandas sobre la capacitación laboral a la altura de las nuevas condi-

13 Según este autor, en una primera fase de la transición se habrían privilegiado políticas estatales intervencionistas y concepciones estructuralistas sobre cómo combatir la inflación (De la Garza Toledo, 2001: 9).

14 Se trata de cifras anteriores al proceso de dolarización iniciado en el 2000; es previsible que los impactos de la dolarización en la débil industria del país hayan agravado esta situación.

ciones de organización de la producción) (Entrevista a Fausto Dután, 2 de enero de 2003). Dután señala, además, el estancamiento de la estructura orgánica en lo que se refiere a procesos de democratización, pues esta seguiría siendo vertical y jerárquica. Tal rigidez organizativa se traduciría, asimismo, en la resistencia, por ejemplo, a descentralizar las decisiones, a realizar elecciones de carácter universal, y a una mayor participación de las mujeres en las instancias de dirección, entre otras. Empero, Dután reconoce también la incidencia de factores externos que habrían profundizado la crisis, y un lugar primordial entre ellos tendrían, además del colapso del campo socialista, algunas políticas en el ámbito laboral adoptadas durante el gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja, que facilitarían el debilitamiento de la organización de los trabajadores:

[...] creo que el efecto fundamental es el de la flexibilización laboral, impuesta desde los intereses de la globalización, de la mundialización, durante esta década de los años noventa [...]. El propio presidente Borja es uno de los hombres que, viniendo de plantear una propuesta entre comillas socialdemócrata, impulsa la flexibilización que afecta desde su base fundamental que es el movimiento sindical, con el advenimiento de una nuevas formas de contratación, como el trabajo a destajo, el trabajo de tiempo parcial. Borja elimina muchos aspectos que tenían que ver con las formas más rápidas y organización de los trabajadores, pone obstáculos a la organización, sobre todo del sector público. Borja hace más dura la organización, cuando aumenta el número de afiliados para constituir un sindicato, que antes era de quince, en un país en donde no tenemos la gran empresa sino mas bien la pequeña empresa, la pequeña industria. Esto se volvió un poco más complicado, porque ahora ya no es posible tener el número que se impone, por decir, treinta trabajadores, generalmente los empleadores tienen veinte y nueve, para no tener treinta. Entonces, desde el presidente Borja en adelante las políticas flexibilizadoras han tenido como objetivo el de afectar la organización, el de debilitar, esta organización, pero al mismo tiempo el de precarizar más las condiciones de trabajo y de salarios (Entrevista a Fausto Dután, 2 de enero de 2003).

Una primera reacción a este descenso de la incidencia de la movilización obrera y sindical tuvo lugar a mediados de los años noventa en su propio seno, en los sindicatos del sector público, concretamente en las áreas de la producción de energía como la Federación de Trabajadores Petroleros (FETRAPEC) y la Federación de Trabajadores Eléctricos

del Ecuador (FEDELEC), sectores que pasarían a formar parte de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), y cuyos dirigentes se convertirían en sus activos impulsores. En tales espacios se constituyó el eje de la –inusual en América Latina– resistencia a la privatización de la producción petrolera y energía eléctrica, política que se encuentra ya consagrada en el texto de la Constitución de 1998 (lo cual, en todo caso, sería un saldo en contra de los propios “nuevos actores sociales”, entre los que se contaría la CMS, que promocionaron activamente la convocatoria de una instancia constituyente). Es, en gran medida, este proceso de resistencia el que ha apuntalado un proceso mayor en defensa del sector estatal, permitiendo que aun cuando haya desaparecido del texto constitucional la definición de “áreas estratégicas”, se mantenga hasta el momento la propiedad pública también sobre el sector de las telecomunicaciones, y que se haya impedido que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pase a manos privadas.

Es justo reconocer el papel de la CMS en la resistencia sostenida, que ha diferido la agenda de las privatizaciones; empero las orientaciones político-sindicales de la Coordinadora de Movimientos Sociales suscitan algunas reflexiones. La CMS, según plantean sus dirigentes, habría intentado saldar cuentas con las limitaciones políticas expresadas por el Frente Unitario de los Trabajadores en décadas anteriores. Un elemento de esta reorientación sería el establecimiento de alianzas con otros “movimientos sociales” (“los nuevos movimientos sociales”). En la apreciación de Iván Narváez, uno de los dirigentes de FETRAPEC, y la Coordinadora de Movimientos Sociales: “el FUT [Frente Unitario de los Trabajadores] no logró articular un discurso coherente que refleje el interés de la pluralidad social y se anquilosó en el inmediatez de las exigencias obreras” (Narváez et al., 1996: 23).

La nueva instancia organizativa, la CMS, se caracterizaría, asimismo, por haber emergido al margen, tanto de los partidos políticos de izquierda vinculados a la práctica sindical, como de las centrales sindicales “tradicionales” y del FUT. Tales serían los signos, en criterio de Galarza, de un “nuevo actor social”:

¿Por qué no se podía construir un remozado paradigma de organización, dirección y conducción socio-política a la vez?
 ¿Acaso el movimiento social tenía que esperar que las viejas y decadentes estructuras de las centrales obreras o los dogmáticos y sectarios partidos de izquierda se rehabilitaran para incorporarnos a la lucha? Había una historia que estaba caminando fuera de nosotros y clamaba por ser reconocida en toda su magnitud y grandeza. Había que dejar a un lado los prejuicios de nuestra propia formación político-ideológica

y enfrentar el reto de la construcción de un nuevo paradigma de la organización y la lucha de emancipación y justicia (Galarza, 1996: 117).

La separación de las corrientes partidarias de izquierda, por parte de la CMS, ha sido explicada por sus gestores a partir del silencio que éstas habrían impuesto a múltiples voces sociales sofocadas por las prácticas políticas “tradicionales”:

No había la fuerza interna en el contexto de la guerra fría, ni quien nos escuche, porque el escenario estaba confeccionado de tal manera que no había participación real y directa para quien no se alineara en el bando social y político de las clases en pugna (obreros y burgueses, que existe por lo demás), liderados por expresiones políticas y partidarias (que eran el summum intelectual y teórico de esa confrontación), las expresiones sociales no enmarcadas en este esquema estaban fuera del proceso.

Para los movimientos sociales (incluido el movimiento indígena, campesino, barrial, movimiento sindical no alineado en las centrales, los cristianos, los intelectuales, etc.) estaban predestinados a jugar un papel secundario, aliados de segundo orden, sectores subordinados anclados y remolcados a las clases revolucionarias. El programa político estaba hecho, el sujeto histórico construido, las estructuras de mando establecidas. No había espacio para los “otros”; cualquier apertura era signo de debilidad, reformismo, oportunismo y cualquier otra cosa. No había espacio para la vida.

El esquema se rompió con la caída (simbólica y física) del muro de Berlín y la sociedad se fue llenando de oxígeno poco a poco. Si todo el esquema que nos imponían fue falso, débil y equívoco ¿qué capacidad moral tenían estos viejos actores de reordenar la vida social y política contestataria de los sectores explotados? Había que seguir adelante desde nuestras propias condiciones de existencia y dar respuestas a los problemas de la cotidianidad, mientras se reordenan los grandes paradigmas y se rehacen las utopías (Galarza, 1996: 135).

La CMS nacía, por lo tanto, en el encuentro de dos circunstancias: el apremio por la aceleración del ajuste, y las severas discrepancias en el seno de las fuerzas sociales y políticas críticas del mismo. Nacía bajo la bandera de la demolición de la conducción político-partidaria y de construcción de una política no partidaria, una política emanada de lo

social y bajo su égida, concepciones que nacen de una “reificación” del “movimiento social”, y de la creencia en que este representaría “el aspecto noble de la política cada vez más degradada e inadecuada”, como ha ironizado Michel Vakaloulis (Vakaloulis, 1999).

En esa búsqueda de incidencia política y social, el sindicato de trabajadores petroleros FETRAPEC intentaría inaugurar un nuevo estilo de presencia pública a través de expresiones político-simbólicas, en aras de concitar la atención de la población sobre los efectos de la ofensiva privatizadora, buscando al mismo tiempo neutralizar los efectos del desprestigio del sindicalismo público llevado a cabo por los medios de comunicación y el gobierno. Es así como en octubre de 1995, la FETRAPEC realizó un encadenamiento simbólico a un oleoducto de cartón y declaró una huelga de hambre que duró nueve días, en contra de los intentos realizados por el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik de ampliación y licitación del oleoducto transecuatoriano (SOTE), y en favor de la renuncia del ministro de Energía y Minas. La forma simbólica de la protesta habría sido privilegiada en virtud del desgaste de la huelga como forma de lucha, y con ello se intentaba también la recuperación interna y de la imagen pública del sindicalismo estatal. La protesta se radicalizó ante las negativas del gobierno a ceder a las demandas de los trabajadores y éstos amenazaron con la automutilación. Así, la idea de “sacrificio” se constituía en el eje del mensaje de los trabajadores petroleros hacia la ciudadanía. Al cabo de varios días el gobierno retiró el proyecto de licitación y ampliación del oleoducto, y el ministro del ramo presentó su renuncia. Habría, a mi juicio, dos aspectos de estas acciones de la CMS sobre los que vale la pena reflexionar.

El primero de ellos es que la nueva instancia sindical habría captado con sagacidad tanto la ineficacia, en ese contexto, de la huelga como forma de lucha, cuanto la importancia de la lucha discursiva y simbólica en la confrontación con el Estado (que sencillamente “borró del mapa” al “movimiento” sindical). Y tales apreciaciones se plasmaron en el mencionado acto de encadenamiento al oleoducto. Sin embargo, la FETRAPEC y la CMS nunca lograron por sí mismas una capacidad de convocatoria similar a la del FUT durante los años ochenta (en cierto sentido, esas instancias permanecían adscriptas a las estrategias de la CONAIE) y, al mismo tiempo, los actos de recuperación simbólica frente a la opinión ciudadana jamás fueron recapitulados.

El segundo aspecto radicaría en el relato mismo del origen de esa instancia sindical, pues la misma nació bajo el signo del apartidismo, relato por excelencia de las elites liberalizantes, aun cuando coincidente con los ánimos de amplios sectores sociales, sobre todo de la Costa. Estos ánimos se plasmaron, a mediados de los años noventa, en la refor-

ma política que dio luz verde a las candidaturas independientes. Tales hechos nos llevarían a pensar que la CMS fue arrastrada por el torrente discursivo liberalizante, sin pugnar por la legitimidad de una presencia pública en términos propios; sin diseñar una estrategia discursiva tendiente a rehabilitar la política y la movilización, rescatándola del manoseo de muchos dirigentes partidarios y sindicales. Lo curioso es también que, de una u otra manera, la CMS aspiraba a lograr una adscripción en el sistema político similar a la que tuviera el FUT, incluida la correspondiente “hiperpoliticidad”, ahora sin partidos. Veamos cómo entendía Iván Narváez este proceso:

Elevar la lucha sindical a la categoría política continúa siendo un objetivo fundamental en la actual crisis, solo cuando la lucha sindical, las acciones reivindicativas sean substituidas por la lucha política habrá recuperación en el ámbito societal global y será determinante para la construcción del nuevo Estado y la economía (Narváez et al., 1996: 27).

Ahora bien en los hechos, ¿estaba este nuevo estilo de presencia pública acompañado de alguna novedad en términos ideológicos, o sigue anclada en el antiguo corporativismo universalista, con sus límites y virtudes para la defensa de la vida de la población? Es una inquietud a la que intentaremos responder en páginas posteriores. Por ahora, lo cierto es que también los sindicatos del sector público han ido perdiendo terreno frente a la imposición del ajuste, aunque cabe reconocer: no sin ejercer una tenaz resistencia. Tal situación podría obedecer a la restricción de la base de alianzas sociales y políticas que devino de la “reificación” del “movimiento social”, logrando un “efecto terapéutico” en las relaciones sociales. Habría aquí, también, una nueva variante de “hiperpoliticización” que ahora tiene como uno de sus ejes el rechazo a los partidos, pues tales concepciones y prácticas tendrían como punto de partida la creencia en la sustitución de un actor social “tradicional” por uno “nuevo”, lo cual recapitulaba la presentación vanguardista de la nueva instancia, recuperando, en el fondo, las antiguas limitaciones del llamado “movimiento obrero tradicional”. Por lo demás, un deslinde basado en la dicotomía “nuevo actor social” / “actor social tradicional” habría representado un obstáculo para los procesos unitarios, tan necesarios en ese momento.

EXPERIENCIA, VISIÓN DEL MUNDO SOCIAL Y PRODUCCIÓN DEL CONFLICTO

Hacia el final del siglo XX, las centrales sindicales y su instancia coordinadora –el FUT– atravesaban una situación de dispersión y acefalía, aun cuando las organizaciones del sector público se sostuviesen en la

defensa de la propiedad pública. En el caso específico de Cuenca y la provincia del Azuay, esta situación se habría tornado francamente catastrófica, pues no solamente habría ocurrido un desmoronamiento del número de organizaciones adscriptas a las filiales de las grandes centrales nacionales. Además, la movilización del sindicalismo del sector público y de servicios parecía menguar ostensiblemente, y este efecto es el resultado de la escasa importancia que los medios de comunicación otorgaban a organizaciones locales que no tienen la envergadura de las organizaciones de la provincia del Pichincha o la ciudad de Quito. Es precisamente esto lo que reconoce José, nuestro interlocutor –abajo presentado–, dirigente sindical de larga data:

En la CEDOCUT teníamos 33 sindicatos hace 10 años atrás, hoy tenemos dos sindicatos en Cuenca, un comité de empresa, tenemos comités pro mejoras como cinco [...], pero es un decaimiento real, por un motivo, las leyes laborales aplicadas por el doctor Borja. Eso trajo el desmoronamiento del movimiento obrero, antes teníamos seguridad y estabilidad laboral. En el gobierno de él se aplicaron las reformas laborales, el trabajo compartido, la ley de maquila, pero como la gente ya no tiene estabilidad busca cualquier otro rumbo, tiene estabilidad cuando tiene incentivo al trabajar, aunque sea ganando poco. Muchos prefieren ganar poco pero tener estabilidad en el trabajo.

El destino de los antiguos trabajadores sindicalizados sería entonces, en gran medida, el exilio económico hacia Europa y los Estados Unidos –situación que, como se ha dicho, es particularmente sensible en las provincias australes– y también la conformación de pequeños negocios o microempresas. Esta circunstancia creada por las políticas flexibilizadoras y la reducción del tamaño del Estado, se habría agravado en los últimos años, a raíz de la implantación de la dolarización. Entre los exiliados económicos se encontrarían también muchos ex dirigentes, y según nuestro interlocutor, de ellos habrían quedado “ocho o diez”; con lo que se presentaría un problema real para la organización sindical a nivel local.

Otro de los factores del decaimiento sindical habría sido la “limpieza” (parte de la llamada “reingeniería”) llevada a cabo en las empresas durante la década de los años noventa. Alejandro, otro de nuestros testimoniantes (también presentado más adelante), ex obrero y activista sindical de la Empresa Eléctrica Regional Centro-Sur, con sede en la ciudad de Cuenca, nos ha relatado sobre las circunstancias de su despido en 1998. Junto con él habrían sido despedidas, igualmente, 120 personas, las más activas en el proceso organizativo. Desde su perspectiva, tal medida no habría estado determinada por contracción de la gene-

ración de energía eléctrica o reducción de los puestos de trabajo, pues tras el despido masivo habrían entrado 140 nuevos/as contratados/as adherentes democristianos, sino expresamente por la necesidad de despejar la organización de los antiguos/as activistas. Lo narrado es parte del entorno de la experiencia contemporánea de los antiguos militantes de la causa obrera. Escuchemos ahora lo que relata uno de ellos.

JULIO

Don Julio, un militante sindical y ex artesano en la rama de zapatería, es un hombre de sesenta y tantos años, cuyas convicciones políticas habrían sufrido redefiniciones sustanciales durante su trayectoria de lucha sindical. Durante mucho tiempo él se ha desempeñado como funcionario de las filiales de dos centrales sindicales, la CEDOC y actualmente la CEOSL, y podríamos decir quizá que, hoy en día, su labor contribuye a dar continuidad a un espacio que de otra manera decaería de manera aun más acelerada. Lo visité en su local de trabajo, en la sede provincial de la Federación Provincial de Organizaciones Sindicales Libres del Azuay (FETLA). Actualmente él se define como “socialista”, aunque se mantiene al margen de toda militancia partidaria:

Yo no aprendí mucho la política. Yo más me formé en el sentido clasista, pero nunca me gustó ser afiliado a un partido, porque uno cuando se afilia pierde su libertad. Después cuando ya se madura se sostiene que políticamente pluralista, doctrinariamente socialista, esas cosas sí que las mantengo.

En efecto, don Julio habría pasado por un proceso de “maduración”, en cuyo devenir se habría aproximado a posiciones clasistas-socialistas, partiendo desde las perspectivas de la doctrina social de la Iglesia. Su trayectoria se inicia en los albores de la década del sesenta, cuando muchos sectores de la sociedad ecuatoriana –como muchos en América Latina– miraban hacia los procesos políticos y sociales puestos en marcha por la revolución cubana y cuando, también, otros sectores, los opuestos a tales novedades históricas, inician una contraofensiva política y organizativa, en cuyo contexto aparece el sindicalismo vinculado a la Iglesia Católica¹⁵. Nuestro interlocutor, según su relato, se habría iniciado en un gremio de zapateros, donde habría sido cooptado por la CEDOC, de inspiración católica, central a la sazón destinada a contrarrestar las influencias de la izquierda:

¹⁵ Una expresión extrema de esta contracorriente, en el caso ecuatoriano, habría sido el movimiento de fanáticos políticos organizado por sectores de la Iglesia Católica, dedicado a colocar explosivos en los templos, de las que se culpabilizaría a la militancia de izquierda.

Tenía mi taller. En una ocasión llegaron unos señores de Quito para buscar un dirigente en Cuenca para que abriera una oficina de la CEDOC [Central Ecuatoriana de Organizaciones Católicas], [...], aquí en Cuenca por los años 1961-1962; alterné para ese cargo y me designaron. En ese entonces no habían muchas organizaciones sindicales, pero sí habían organizaciones artesanales de las sociedades obreras. En esa misma época, recuerdo de un señor Serrano que ayudó a que se multipliquen las organizaciones católicas para luchar contra el comunismo. Me llevaron a Quito para capacitarme, aquí se quedó el taller [...]. Cuando regresé comencé a llamar la atención, todo lo que aprendí por allá compartía aquí. [...] Iba avanzando el movimiento sindical y yo ya sabía lo que significaba el primero de mayo con los barrenos municipales y las tejedoras de paja toquilla de Checa. En el parque de San Francisco fue mi primer discurso revolucionario del primero de mayo, y eso me costó que me botaran de la Curia [donde estaba localizada la sede de la organización obrera].

La aproximación de don Julio al sindicalismo clasista se habría gestado, pues, en el proceso mismo de organización y lucha sindical –no sin profundas contradicciones ideológicas–, en el terreno de la superación de perspectivas abiertamente anticomunistas. Desde mediados de los años setenta en la ciudad de Cuenca inicia el proceso de constitución de sindicatos, al calor de un avance de la industrialización local –como parte del entonces en boga proceso de sustitución de importaciones–, pero también del trabajo de la militancia comunista y socialista, y también del activismo de los propios obreros y sus dirigencias.

La toma de conciencia era como la aspiración de superación de las centrales. Nosotros teníamos la CTE que era enteramente revoltosa, y los dirigentes eran bien preparados, el mejor orador nuestro no se comparaba con el último de ellos. Nosotros no podíamos quedarnos atrás, no solo en la aplicación de la ley sino también en dirigir. Así empezamos a crear la rebeldía. Así sembramos en todas las centrales sindicales, con fundamentos, con bases, estudios. La CEOSL trajo instructores, fue la primera escuela sindical que había, con muy buenas políticas, no tenían reparos en invitar a todos los que querían estudiar, allí se formaron cuadros de la CEOSL, la CTE; no se preguntaba de dónde eran, la escuela era abierta para actualizarnos de lo que pasaba en el país y en todas partes.

Así, a pesar de los intentos por contrarrestar la influencia del pensamiento sindical de izquierda a través de la ORIT y de la CLAT, el pro-

ceso político escaparía al control del Estado y la patronal, a merced de un proceso de constitución de identidades político-sindicales colectivas, sentimientos de pertenencia a la organización y elaboración de la alteridad del patrono y el Estado, aun cuando los contenidos ideológicos no fuesen nítidamente clasistas y/o de izquierda. En este momento, por lo tanto se habría tratado de un proceso –como diríamos contemporáneamente– de habilitación (*empowerment*) mediado por la capacitación que hacía posible la construcción de un discurso sobre la sociedad (el elemento “derivado”, en términos de Rudé), “habilitación” que coadyuvaba a la condensación de un sentimiento de “rebeldía” y apuntalaba una confrontación más bien circunscripta a las relaciones obrero-patronales en los micro-ámbitos (fabriles, de servicio u otros).

Ahora bien, ¿cómo entender, en primer lugar, la actual definición de don Julio como “políticamente pluralista, doctrinariamente socialista” y cómo tal autoadscripción se enlazaría a sus perspectivas sobre el orden social? ¿Cuál podría haber sido la fuente de esta identificación y como esta se enlaza a la producción del conflicto? Veamos cuál es la representación que don Julio realiza del mundo social y político a través de su visión de los intentos del gobierno de Gustavo Noboa por la privatización de las comercializadoras de energía eléctrica, asunto fuertemente discutido a inicios del año 2002:

Como todo sistema globalizador, la privatización de las eléctricas es otra estrategia del sistema capitalista para acaparar todo lo que es del bien público. Si ellos están en el poder ¿quién les dice nada? ¿Debemos acaso callar y dejar que siempre nos enajenen, ser obedientes y sumisos a todo? Ahí están comprometidas las altas esferas políticas y económicas, entonces qué les va importar el país, solo les interesa que venga el dinero fácil y que nadie les moleste aquí. Esto están haciendo los banqueros y nuestras leyes están tan bien hechas para favorecer a los grupos de siempre.

Un primer elemento de la representación se tejería en torno de la noción de “interés” que gira alrededor de la idea de “bien público”, que aludiría tanto al bienestar de la población como al régimen de propiedad social (y quizá también a la delegación a un ente social superior para que vele por el bienestar y los intereses de todos). Contrapuesto al “bien público” sería el “acaparamiento”, la enajenación de los demás, del pueblo. Existiría, con todo, también la asociación entre el “acaparamiento”, la ambición facilista y la negligencia frente al “país”, por parte de las elites: “los banqueros”.

En un segundo momento aparece, en la alocución de don Julio, la condensación política de ese interés por el acaparamiento “capitalista”

y “globalizador”, y el interlocutor describe esta situación a través de la visión de los cambios sociales al filo de los años noventa, pues:

Con la caída del muro de Berlín vino el dominio del sistema capitalista, no solo en Ecuador sino en el mundo entero, ya que no hemos tenido la suficiente fuerza para resistir esa presión. Se dice también que llegó con eso el fin del socialismo, inclusive refiriéndonos solo a ese término, ahora no nos referimos a ese término para decir que queremos igualdad o dignidad, si eso es el socialismo deberíamos ser todos socialistas, pero ocurre que con las dádivas del capitalismo y con sus mentiras hemos perdido no solo nuestros recursos sino también el recurso humano. Ahora cuando ya no hay qué quitarle al trabajador dicen que vamos a la flexibilidad laboral, y esto no responde solo a un nivel nacional, es en todo lado. Yo no sé hasta cuándo vamos a reaccionar, además está el impacto que proyectan los medios de comunicación, ya no tenemos identidad, ni en la ropa ni en la comida ni en nada, desde afuera nos dicen lo que es bueno, por ejemplo a los sectores artesanales ahora les dicen que tienen que invertir en las microempresas, no digo que eso está mal, pero ¿dónde quedan los conceptos de solidaridad?

El relato estaría estructurado en torno al eje capitalismo-socialismo, cuyos polos se van dotando de contenido a partir de redes de nociones tales como “acaparamiento”, “dinero fácil”, “mentiras”, “enajenación”, por un lado, y “dignidad”, “igualdad” e “identidad”, “solidaridad”, por el otro. Diríamos que mientras la noción de capitalismo está definida a partir de categorías morales, la idea de “socialismo” es difusa y está sobrepuesta con “bien público”, también con fuertes connotaciones morales, aunque también referida a categorías políticas modernas como las de “igualdad” y “dignidad” (ver esquematización en el Cuadro 7 del Anexo).

Este eje se sustentaría, pues, en dos pilares ideológicos: el uno anclado en lo político, en tanto modelo de sociedad, y el otro en lo moral, en tanto atributos de cada uno de los modelos. Considero que mientras el momento moral está claramente definido y sus atributos establecidos, el modelo político se encuentra diluido en aquél, referido exclusivamente al bien público, y desembocando en la configuración de un “interés” (de “clase” con proyecciones universalistas). Ahora bien, ¿cuál sería, en tal contexto, el momento de producción del conflicto, el momento del interés o el momento político?

La gente si no protesta es como si no existiera. Debemos protestar, porque la protesta es la existencia del trabajador solo así se pueden entender las cosas porque ya la palabra, el diálogo, la

ley tiene un sentido, pero la protesta, la rebeldía tiene un sentido viviente, si no se es rebelde no es nada. Nosotros decíamos a los compañeros: “que el hombre no proteste por la sopa en la cocina, que el hombre pelee por la sopa en la calle”, porque al salir a protestar es conseguir mejoras para todos.

Este fragmento revelaría que el momento desencadenante del conflicto sería el del interés por mejoras de la calidad de vida del conjunto, por la preservación del bien público. El momento político sería, entonces, subsidiario, y el socialismo un referente vago siempre superpuesto con la idea de bien público. Siguiendo esta lógica, se podría interpretar que la pretérita existencia del socialismo real habría sido apenas un momento de oportunidades mejores para la clase obrera, y no necesariamente un modelo a seguir o un proyecto político crucial. Emerge así la reivindicación orientada a la consecución de beneficios “para todos”, y es eso lo que estamos denominando “corporativismo universalista”. De modo que tanto el corporativismo como el corporativismo universalista, en tanto sentimientos y culturas basados en la comunidad, pueden estar yuxtapuestos sin mayores conflictos con la idea de socialismo. La rebeldía se orientaría a la defensa del bien público, en consecuencia, hacia la impugnación del tipo de contrato social que permite el “acaparamiento” a espaldas y en perjuicio de la comunidad. Se trata, en buenas cuentas, de un “reciclaje” de la idea de “socialismo” y de disolución en una lógica comunitaria cristiana, mientras las nociones políticas de “igualdad” y “dignidad” se diluyen en esta definición.

Es interesante, además, llamar la atención en que, si bien don Julio enuncia la existencia de “banqueros” y “modernizadores (privatizadores) ladrones”, no se enuncia con toda claridad la existencia de una “clase obrera”, en tanto polo de oposición a las presiones de los primeros. Posiblemente, este silencio se deba a que “lamentablemente hoy día al mismo trabajador solo le importa el trabajo y cuánto le pagan, el resto no le importa, nada de seguridad”; inmovilidad que le produce ansiedad en virtud de que “se toman medidas de saneamiento momentáneo, nada de contratos colectivos, nada de sindicatos, nada de organizaciones. La lógica es: “esto trabajan esto ganan, si no rinden se van”, peor con la famosa flexibilidad laboral o la famosa reducción del Estado, realmente la clase trabajadora en el país ha retrocedido a la esclavitud. Todas las garantías para los trabajadores ya no existen, peor la organización”.

Es decir, los trabajadores estarían limitados a sus reivindicaciones puntuales, sin expresarse –diríamos nosotros– a través de reivindicaciones universalistas que pudiesen sostener la “seguridad”, aunque en cierto momento reconoce brevísimamente su mérito en la lucha contra

la privatización de las eléctricas. Parecería, entonces, que la ausencia del enunciado sobre la “clase obrera” –en tanto referente de una situación social e histórica deseable y de una lucha actual– estaría originada en el reconocimiento silencioso y angustiante de la fragmentación o estado de crisis de la entidad colectiva, estado que emanaría de la constatación de la incapacidad para expresarse de manera universalista. Es así como su identidad en tanto miembro o partícipe de “la clase obrera” estaría fracturada.

Los trabajadores del relato de don Julio estarían, al parecer, inmovilizados por los sentimientos que Fredric Jameson define como “las ansiedades antiutópicas y los miedos a cambios más profundos” (Jameson, 1999: 189). Quizá por el miedo a perderlo todo. Es ello lo que provoca también la ansiedad del veterano sindicalista, es ello lo que lo confrontaría consigo mismo, con su propia práctica sindical, lo que inhibiría la actualización de su autoadscripción de clase.

ALEJANDRO

En otra vertiente del movimiento sindical, la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) y su expresión local, la Federación Provincial de Trabajadores del Azuay (FPTA), algunos dirigentes ciertamente tendrían una vertiente previa de formación partidaria de izquierda, lo que habría contribuido notablemente a la elaboración de los relatos político-sindicales de la época, aun cuando en la cotidianeidad las prácticas asumiesen otro carácter. Así relata, por ejemplo, nuestro interlocutor Alejandro –un ex obrero de la generación de energía eléctrica, de 59 años, de origen popular-urbano, hoy desempleado y militante del Movimiento Popular Democrático– su experiencia previa a la entrada al movimiento sindical:

Yo tuve a mi padre que no fue de izquierda, tuvo la actitud de un militante de izquierda, pero se equivocó y pensaba que a lo mejor Velasco Ibarra iba a solucionar todos los problemas. O sea, no comprendía la esencia, ahí es justamente la capacitación política ideológica que debe tener un dirigente, un trabajador para comprender por qué está, contra quién luchamos. [...] él se oponía a la oligarquía, al imperialismo que toda su vida ha manejado a su antojo a los pueblos, [los] ha hecho flecos con sus invasiones, las guerras. Yo desde muchacho fui asimilando esa cuestión, posteriormente cuando tuve 25-24 años me invitaron a afiliarme al Partido Comunista del Ecuador [de orientación prosoviética] aquí en el Azuay, yo ya había estado en una asamblea muy buena a raíz de la muerte del Che, habían expositores y expositoras. Más me llamó la

atención una compañera que [...] era una oradora excelente, tenía un carisma... llegaba ¿no? [...]. Yo tenía un hermano que militaba en un partido de izquierda, él me dijo: “afíliate al partido” [...]. Yo entré a militar en el Partido en 1969 [...]. Y eso lo he transmitido a los compañeros, al pueblo en las diferentes situaciones que hemos tenido que atravesar.

En este contexto, el origen de los males sociales estaría ubicado en los exteriores de América Latina, connotando una perspectiva más bien internacionalista de los problemas sociales existentes al interior de las fronteras nacionales. A diferencia de don Julio, Alejandro parece inscribir su visión del orden social en una perspectiva altamente politizada. En lo que concierne a la producción del conflicto, la misma tendría ribetes similares a los analizados en el caso anterior, es decir, el clasismo tendría un anclaje en la demanda de mejores condiciones laborales y salariales, aquí contextualizada por una perspectiva ortodoxa sobre el socialismo:

P.: ¿Por qué protestar?

R.: [...] muchas veces se cree que nosotros nos oponemos al gran capital porque no estamos de acuerdo o porque no estamos en el poder o perdimos las elecciones o perdió nuestro candidato. No es así, la economía está manejada por un grupo totalmente reducido y no se considera a la fuerza de trabajo como un elemento vital para la producción, se quiere subestimar y tenerle al trabajador pisoteado. Entonces, una de las cuestiones, sin llegar al economicismo, ha sido el aumento de sueldos y salarios, pero también oponernos al incremento de los precios de los artículos de primera necesidad, lo que nos ha llevado justamente a la protesta, entonces ha sido una protesta que ha sido llevada acertadamente [...] y no ha sido por anarquizar el país o siquiera por tener una posición ideológica ya mucho más avanzada, no ha sido eso sino considerando la verdadera realidad en [la] que vive el pueblo.

En esta alocución estaría subyacente, bajo una retórica ortodoxa, una demanda de ciudadanía social respaldada en la idea de dignidad y no una mera reivindicación “economicista”, demanda que, desde tal punto de vista, sustentaría lo que hemos denominado “corporativismo universalista”. Demanda que, por otro lado, se constituye en un puerto de llegada de las luchas, provisional pero al parecer seguro. Del conjunto del diálogo colegimos que, sin embargo, aun este politizado interlocutor disocia las reivindicaciones de políticas sociales, de solución a los problemas de salud, educación y vivienda, de la evaluación política,

pues solo retrospectivamente, al recordar la época febres-corderista, Alejandro otorga a la protesta una significación política, al aludir a las llamadas “huelgas políticas” opuestas a “un gobierno fascistoide”. Tal conclusión iluminaría, nuevamente, las limitaciones políticas y estratégicas (en el sentido que de Certeau otorga a este término: hablar y actuar desde un lugar propio) que devienen de un estilo “hiperpolitizado”; aquí, tal matiz de la actuación política estaría acentuado en ciertos aspectos de la práctica sindical, mientras es inhibido en las prácticas propiamente “clasistas”.

Al comparar los relatos de ambos militantes sindicales, podemos evidenciar, en el caso de Alejandro, una identidad basada en la continuidad de los contenidos ideológicos, en la cual no parece haber hecho mella la desocupación y la pérdida de referentes partidarios sólidos (quizá debido a que el relato existencial se construye fuera del ámbito sindical), y al mismo tiempo percibimos las limitaciones en la politización de la dimensión “clasista”. En el caso anterior, el de Julio, en cambio, observamos la fractura de la autodefinición en tanto miembro de la “clase obrera”. ¿Ha sido esto configurado por la fragilidad de las adscripciones políticas? En este caso, el interlocutor resiste a las alternativas individualistas. Pensaríamos que, en el plano ideológico, tal es la matriz que se expresaría, en términos mucho más amplios, en la pérdida de incidencia pública y en el menoscabo simbólico del sindicalismo. Y los efectos sociales de esta matriz ideológica habrían sido ahondados por la dispersión que indujo salidas individualistas a los embates de la crisis y la política del ajuste.

POLITICIDAD Y PROYECTO

Como en los capítulos anteriores, al hablar de politicidad me refiero al conjunto de nociones sobre el manejo y acceso al poder, nociones sobre la autoridad y los partidos políticos. Recordemos también que ya con anterioridad nos habíamos remitido a los conceptos elaborados por Geórgé Rudé sobre la constitución de la ideología (ver el Capítulo I). Este autor considera que en la producción de la ideología confluyen nociones que surgen, tanto de la experiencia –“elemento inherente”, según Rudé–, cuanto a los conjuntos artificiales de ideas –el “elemento derivado”, desde el punto de vista del mismo autor–, y también a las prácticas de los sujetos colectivos en sus actuaciones en sistema político. En esta sección analizaremos las definiciones políticas de nuestros interlocutores.

JULIO

Decíamos en páginas anteriores que en las concepciones de Julio sobre el orden social gana una relevancia central la dupla capitalismo-socialismo. Cada uno de estos términos aglutina en torno a sí la red

de nociones que caracteriza el contenido que el interlocutor atribuye a cada uno de esos modelos de sociedad. Señalábamos, además, el carácter moral de sus apreciaciones políticas, que no obstante están incrustadas por categorías políticas modernas tales como la igualdad. Nos referimos, finalmente, a la primacía del concepto de “bien público” e “interés colectivo”, como preludio de las representaciones sobre la política. Veamos, ahora cómo se enlazan tales representaciones sobre los fines de la política con las perspectivas de don Julio sobre la autoridad. Si la meta deseada parece anclar en la idea de bien público, un buen gobierno, por otra parte, debería “salirse de las empresas electorales. Lo que hicieron con Mahuad y con los otros, ellos [quienes financian las campañas electorales] dicen al más probable tanto, al otro tanto... Todos [los candidatos] tienen el mismo compromiso. Serán buenos planificadores, buenos oradores, pero en la práctica sí les falta [a los políticos]. Ahí sí quisiera, como Pancho Villa, ir con un látigo castigando a todos esos malos gobiernos, aunque parezca una crueldad. Yo sí creo que se disminuiría la corrupción, porque primero es el escándalo real –“aquí está el ladrón”–, y luego la vergüenza que vivirían”.

Nótese que, en rigor, no hay una censura al contenido y al estilo del ejercicio del poder sino a las orientaciones éticas del mismo; el remedio, consecuentemente es –justiciera y bíblicamente– moralizante. Veamos ahora cómo se enlaza esto con la perspectiva que, pensamos, tiene este interlocutor sobre las impugnaciones presidenciales de los últimos años. Según este interlocutor, “la caída de Bucaram fue un complot más desde los ricos, de los políticos que no les gustó la política de él y como la mayoría somos crédulos pensamos que su caída era lo mejor”. En lo que corresponde a la percepción de las políticas de ajuste, Julio expresa indefinición:

P.: ¿Qué aspectos negativos vio en el gobierno de Bucaram?

R.: Como todo gobierno tuvo sus aspectos malos, sobre todo sus asesores, ministros que se aprovecharon de las circunstancias que vivió el país. Hubo un nivel tan bajo en todo el gabinete.

P.: ¿Y los aspectos negativos?

R.: Algo que siempre recuerdo es que decía “comprenden dólares, yo sé por qué les digo”. Ahora sabemos por qué dijo esto y quiénes se aprovecharon en el país.

En primera instancia, la alocución mantiene implícito un rechazo y un deslinde frente a la impugnación de Bucaram: “no fuimos nosotros quien lo deseó, fueron los ricos”. Es probable que esta apreciación del interlocutor sobre el gobierno de Bucaram haya sido elaborada en lo posterior. Diversos interlocutores con quienes hemos dialogado sobre

el tema, en otros contextos, han manifestado su arrepentimiento por haber participado en la impugnación de Bucaram, arrepentimiento que es posterior a la experiencia de los impactos sociales y cotidianos de la gestión de Mahuad, de su alineamiento explícito y radical con la plutocracia. Dichos interlocutores opinaron *a posteriori* que Bucaram quería que el país entrase en la convertibilidad “pero con el dólar a cuatro mil sucres” y que, por lo mismo, no fue una buena idea derribarlo. Sin embargo, pienso que esta posición de don Julio, en todo caso, estaría más bien reflejando las expectativas que abrigaban varios sectores críticos a la implantación del modelo neoliberal. De tal manera, el apoyo brindado a Bucaram respondía a la esperanza de que él detuviera las inevitables medidas que todo gobierno había venido tomando desde 1982, y cuyos efectos se acentuaban más y más. Estas esperanzas estuvieron respaldadas, para muchos/as, en la promesa leída en los denuestos lanzados profusamente contra Febres Cordero: él era el único y “no le pasa nada” (León, 2001, Capítulo IV; sección “Protección y orden”), me decía una interlocutora en 1999.

En un sentido similar, desde el punto de vista de los sindicatos y de muchos de sus miembros, se esperaba que Bucaram detuviera las presiones por la privatización de las empresas públicas y la dolarización, que desde hace tiempo venían anunciando los empresarios y banqueros guayaquileños. Expectativas de salvación que serían reactualizadas luego, en el contexto de los efectos sociales de la dolarización y el avance de otros elementos del modelo, que invocan la nostalgia por algo inconcluso: “de gana le botamos al loco”, y que significarían la espera de un mesías, llámese Abdalá Bucaram, Álvaro Noboa o Lucio Gutiérrez.

En un segundo momento, don Julio evita confrontarse con nuestra interrogación sobre los aspectos negativos que habría observado en la gestión del ex presidente, desplazando la responsabilidad por posibles errores hacia sus colaboradores¹⁶. Como veremos más adelante, don Julio no es el único representante del sector sindical que, de una u otra manera, habría respaldado a Bucaram. Escuchemos, ahora lo que don Julio opina sobre la impugnación a Jamil Mahuad:

P.: En la época de Mahuad, ¿por qué fue el descontento de la clase obrera?

R.: El descontento no solo fue de la clase obrera, fue más bien del sector bancario, donde todos en mayor o menor grado tenían sus dineros en los bancos, fueron los cuentacorrentistas los más descontentos, allí se vio quiénes manejaban en verdad

16 Similares desplazamientos de responsabilidad, tanto de Collor de Mello como de Bucaram, realizan varios de los hombres y mujeres que beneficiaron con su testimonio la investigación de mi libro ya mencionado (León Galarza, 2001).

el poder económico que ha sido tan fuerte. Creo que Mahuad tuvo un respaldo internacional, pero que terminó arruinándonos a nosotros. Sin embargo, Mahuad tuvo la valentía de decir “hasta aquí”, de lo contrario debía seguir agradando a los unos y a los otros, ya que la presión fue muy grande.

Nuevamente escuchamos una excusa a otro ex mandatario. De ahí que podamos interpretar que para muchos sectores populares y de trabajadores, Bucaram no representaba mayor amenaza al “bien público”, aun cuando transgrediese la majestad de la función presidencial. Por otro lado, la “valentía” de Mahuad podría, al parecer, purgar su “culpa”. En síntesis, la fractura de la identidad en tanto “obrero”, junto con la recusa a la definición partidaria mantiene una puerta abierta a las opciones identificatorias, con la correspondiente delegación de la autoridad moral y la demanda de una rendición de cuentas de carácter ético, mientras, por otro lado, está ausente una definición política de intervención o mudanza en el modelo de sociedad, sino que se proclama la idea de “bien público” en tanto “bienestar”, connotando una idea de ciudadanía social apuntalada desde lo que hemos denominado “corporativismo universalista”.

JOSÉ

Para no imputar las evasivas políticas de don Julio y la propensión a las opciones políticas identificatorias a su opacidad doctrinaria o a su no alineación partidaria, escuchemos a otro interlocutor del sector sindical, José, de unos 45 años y militante de otra central sindical. Lo visité en el taller de metalmecánica de su propiedad, abierto tras su suspensión en la fábrica en la que trabajó durante décadas.

José se declara abiertamente de izquierda, manifiesta su adhesión a la tendencia política y su proximidad a la corriente socialista; relata, asimismo, que procura no ser absorbido totalmente por el trabajo en beneficio personal, ya que se esfuerza por dedicarle unas horas diarias y el fin de semana al activismo político que él realiza, en primer lugar, en la central a la que estuvo afiliado el sindicato en el que militó durante muchos años –aunque ya no forme parte del sindicato–, en segundo lugar, al programa radial que mantiene desde hace unos años y, finalmente, al trabajo organizativo y de difusión que realiza en comunidades campesinas ubicadas en los alrededores de la ciudad de Cuenca. El interlocutor insiste en demostrarme su fidelidad a la lucha, y me muestra unas banderas rojas y materiales para la elaboración de pancartas que guarda en su taller; me dice también que ha involucrado a su familia en esta labor.

Se trata de un (ex) obrero de origen campesino, cuyo padre habría trabajado como albañil y su madre como vendedora de hortalizas,

ambos “sumamente pobres”. Narra también su vida de trabajo en la industria desde los 13 años, y no olvida mencionar su trayectoria como formador de innumerables organizaciones sindicales, pues se considera “un luchador, la lucha la llevaba adentro”. Así, pues, escuchemos cuál es la posición de este interlocutor con respecto a las impugnaciones a los dos mandatarios durante los últimos años.

P.: ¿Por qué se debía botar a Bucaram?

R.: Yo creo que el tipo ganó y bien ganado, a mí me parece fue una presión más desde los intereses económicos, ciertos grupos no estaban de acuerdo, pero con los medios de comunicación, que juegan un papel muy importante, lograron plasmar la imagen de una insatisfacción total. Pero creo que fue el descontento más desde los grupos económicos a quienes no les dio paso. Luego Bucaram cometió ciertos errores, eso de estar andando hecho el artista, futbolista, cantante, la gente se disgustó por no ver la seriedad que como presidente debería tener, además se sumó la vinculación de su familia con el poder, le tenía a un hijo en las aduanas. Pero la gente siempre ve las mínimas cosas, lo más importante para mí [era] que “el loco” sí estaba haciendo ciertas cosas buenas, estaba planteando las reformas al sistema económico, él planteó la convertibilidad o la dolarización, claro que le trajo al mismo asesor argentino. [...]

P.: ¿Cuál es la diferencia entre botar a Bucaram y a Jamil?

R.: Ahí sí, yo estaba de acuerdo con que se le bote al Jamil, primero porque hasta ahora la gente está sufriendo por la cuestión de los Bancos, usted verá que los canales de televisión, las campañas de elección todo se hacía a través de Filanbanco, todo eso fue porque le dieron plata para su campaña, al menos yo creo que toda la gente estuvo de acuerdo. Más bien con “el loco”, luego se dieron cuenta que no era tan grave, la organización a veces es un poco utilizada, manejada, la gente a veces es más espontánea; cuando ve las cosas injustas, sí sale a protestar. En esos dos casos lo que se vio es que cuando el pueblo se para, se para, los militares no pudieron detener. Lo que pasa en Venezuela, con las Fuerzas Armadas, con el Fondo Monetario, con la Iglesia, con los medios de comunicación, el pueblo salió, allá quién le quiere botar al Chávez [son] las Fuerzas Armadas, las cámaras de la producción, los medios de comunicación, la Iglesia y cierta dirigencia también de los trabajadores, en cambio el pueblo no. Acá fue el pueblo, porque siempre será más poderoso. El caso de Chávez y de Bucaram sí puede ser

parecido, pero el mal ejemplo de él fue lo que le arruinó al “loco”. Nuestro pueblo lastimosamente es tan frágil, ahora le dicen una cosa y obedece nomás, o se olvida. Políticamente sí hizo cosas interesantes por los niños, aunque también con errores, lo de la mochila escolar, ¿por qué mandaron hacer en Colombia cuando se las podía hacer aquí? Hizo muchas cosas incoherentes, y el pueblo ya no se deja engañar fácilmente.

Una primera sorpresa me llevé al advertir el apoyo implícito de José a Bucaram, sorpresa que se iba ahondando al escuchar que el interlocutor pensaba realmente que Bucaram sería una opción y que, aun más, las novedades propuestas por Bucaram, tales como la convertibilidad, serían positivas, a pesar de que se las iba a impulsar bajo el asesoramiento del ex ministro argentino Domingo Cavallo. Por supuesto que mi sorpresa se dio en la medida que la conversación sostenida con José tenía lugar después de que el mundo conoció de la catástrofe argentina, que fue resultado de similares políticas económicas y de que, suponía, que el politizado ex obrero estaría al tanto de los sucesos argentinos de 2001. Sin embargo, mi interlocutor se aferraba a la idea de que Bucaram podía haber salvado al país (apreciación que habría sido elaborada también *a posteriori*, contra el telón de fondo de las políticas de Mahuad y el congelamiento de los depósitos bancarios decretado por este).

El testimonio de José es, evidentemente, una clara expresión de la superposición del “elemento derivado” del que nos habla Rudé (en el caso de José, la crítica doctrinaria al ajuste) con el sentido común, el “elemento inherente”, y es ahí donde ocurre la fusión que engendra la idea de salvación endosada a un líder, en la medida que el interlocutor no logra decodificar los alcances de políticas de Estado que rebasan los límites de la acción de un político. Por otro lado, la apuesta del interlocutor por el asistencialismo gubernamental apuntaría claramente a la idea de “bien público”, presente en las concepciones de don Julio.

Sugeriría, en primera instancia, que el paralelismo trazado entre Bucaram y Chávez indicaría quizá una remisión del primero a la figura del héroe salvador, con las complejas implicancias que la acompañan (ver la sección “Entre la política y la cotidianeidad: explorando salidas”, en el Capítulo I de este libro). En esta alocución parece implícita también una expectativa frente a Bucaram, al considerarlo gestor del bien público, atributo que estaría ausente en la imagen de Jamil Mahuad, en la perspectiva de José.

La noción de bien público se presenta, entonces, en ambos casos, como el nudo político-moral en el que se decide la protesta. No se trata, por cierto, de que todo “acaparamiento” lesiona al bien público, sino de que habría un umbral en el cual este es considerado lesionado (es quizá

por ello que don Julio no censura contundentemente a Bucaram, y ni siquiera a Mahuad). La protesta parece, pues, detonar en el momento en que se transpone dicho umbral de tolerancia al menoscabo del bien público. La protesta sería en ese sentido “selectiva”, habría para ella un tiempo específico determinado por la cualidad y calidad de la transgresión. Y quizá la fuerza de los reclamos durante la segunda mitad de los años noventa e inicios de 2000 obedezca al inusual trastorno de la vida cotidiana, y la inusual violencia ejercida contra la escala de valores básicos promovida por el ajuste, aunque muchos trabajadores –y con ellos vastas capas populares– eventualmente estarían dispuestos a obviar tales hechos.

Deseo también llamar la atención sobre la ambivalencia que adquiere el “pueblo”, referente identitario central del sindicalismo de los años ochenta, tributario y sujeto activo del cual fue José en aquel tiempo. El pueblo es concebido ora como poderoso, ora como frágil y olvidadizo, esto podría significar que también aquí tambalea la identificación con la “clase” y con el “pueblo”, referente universal. No obstante, aquí el interlocutor no se ha dejado embargar por los miedos a cambios más profundos, de los que habla Jameson, y continúa con su activismo a pesar de su soledad.

ALEJANDRO

Dentro de esta trilogía de relatos, el de Alejandro sería el único en el que no percibimos la fractura de la identidad obrero-sindical, aunque escuchamos constantemente palabras que podrían interpretarse como justificativos de las acciones llevadas a cabo durante estos años, y de los pensamientos que las guiaron. En todo caso, es interesante el valor que asigna este politizado ex sindicalista a las luchas electorales del presente, en el contexto de un proyecto de sociedad de mayor aliento, que estaría inspirado en “el marxismo-leninismo bien enfocado”:

P.: Después de las conmociones de 1989 ¿cómo debería estar organizada la sociedad?

R.: [...] Yo creo lógicamente que el marxismo-leninismo es una alternativa real, muchos sociólogos, muchos analistas, muchos investigadores plantean que debería verse la forma de consolidar un nuevo modelo, esquema con nuevas formas y planteamientos. Tal vez pueda darse el cambio, nuevas formas de producción, la técnica, la ciencia, estamos en una situación totalmente avanzada, ha cambiado, pero, sin embargo la explotación no ha cambiado, no ha cambiado en nada la humanidad, más bien se agrava. Los problemas de Irak, de Latinoamérica, del Medio Oriente, del Asia, del África no han

cambiado absolutamente nada, entonces eso tampoco garantiza que el modelo neoliberal que es el que maneja el imperialismo sea una alternativa para los pueblos del mundo. Entonces... el marxismo-leninismo, pero en ese proceso podrían darse algunas formas de ir avanzando, yo no sé, el gobierno de Lucio Gutiérrez parecía que era una alternativa, daba una esperanza a los sectores populares, pero en la práctica vemos que no ha sido así...

Los gobiernos democráticos son definidos por este interlocutor a partir de la obligación con el respeto de los derechos humanos y la solución de problemas económicos y sociales, y no solamente como ausencia de represión, serían un momento de una construcción más avanzada:

[...] leí un documento de Evo Morales, me parece muy importante consolidar este grupo sudamericano en lo económico para desplazar al ALCA, pero se avanza por una parte... el imperialismo no le dejó triunfar a Evo Morales en Bolivia, el avance del triunfo de Lula, que directamente no esté aplicando un modelo marxista-leninista, sin embargo hay reivindicaciones que van identificándose con la izquierda, pero que van beneficiando a los sectores populares. La cuestión de Chávez en Venezuela es totalmente marcada, hay un respaldo [...] popular al gobierno y un rechazo de la gran oligarquía y de la pequeña burguesía y alta. Entonces aquí en el Ecuador nosotros teníamos la esperanza, con Lucio Gutiérrez avancemos en un proceso, pero nosotros tampoco queremos entrar a radicalizar [...] teníamos la esperanza, pero ahorita yo pienso que no hay absolutamente nada. Entonces una de las alternativas yo creo es llegar a un modelo socialista, es duro este momento, pero yo creo que sí podríamos seguir avanzando con gobiernos que se identifiquen de una manera democrática.

Así, pues, en términos reales, parecería inclusive que estos “duros” sindicalistas, con la utopía futurista viva y la idea del socialismo a flor de piel, han apostado hoy por hoy a un momento intermedio, un mundo posible con ciudadanía social, y al igual que Julio –indefinido en términos doctrinarios– realimentan opciones personalistas. Inspirada en relatos existenciales diversos, originados tanto dentro como fuera del espacio sindical, la protesta de todos ellos confluiría en la búsqueda de efectos macrosociales, digamos “universal-corporativistas”, y en tal sentido se instala en la producción de un antagonismo mediado por la precarización de la sociedad. Sin embargo, no hay respuestas políticas que viabilicen consistentemente esa búsqueda, la misma que está atra-

pada sin salida en el laberinto de las opciones identificatorias, de ahí la operación permanente de “descarte” entre opciones neopopulistas, primero Bucaram y ahora Gutiérrez, que han hermanado a amplios sectores obreros con sus pares “del pueblo”.

Al explorar las miradas de los dirigentes sindicales de nivel intermedio, hemos observado una diversa “dosificación” y “combinación” de los contenidos ideológicos, con énfasis igualmente disímiles ora en elementos político-doctrinarios, ora en ribetes religiosos. En todo caso, el tenor de sus alocuciones retornaría a la experiencia cotidiana, con sus creencias y evaluaciones, que resaltan el asistencialismo y el bien común. La eventual radicalidad del discurso, entonces, desembocaría en una “terapéutica” de las relaciones sociales.

COMBATES Y PLEGARIAS

Los ribetes ideológicos –latentes más allá de las declaraciones públicas y de los enunciados sindicales en el ámbito de lo político, pero que marcan también el sentido de la protesta– pueden ser mejor analizados en los documentos elaborados por los propios trabajadores. José me proporcionó un folleto escrito por él, en calidad de secretario general de la organización sindical, y editado en mimeógrafo. Lo traigo a colación, debido a que podría ayudar a esclarecer elementos durables, tales como representaciones, rasgos culturales y prácticas que incidirían en el posicionamiento de este sector de trabajadores aún a mediados de los años noventa. El breve texto (catorce páginas) data de 1986, y narra la historia de la organización que a la fecha habría cumplido 10 años de existencia (Comité de Empresa, 1986). El trabajo representa un esfuerzo de recopilación histórica concienzuda, ya que, según señala José en la presentación, la información proporcionada “se ha tomado de las actas, archivos y de la propia experiencia vivida durante más de 20 años” (Comité de Empresa, 1986: s/n¹⁷). De tal manera, se inscribiría en una “política de la identidad” sustentada en la gestión de la memoria, que apunta a sostener la cohesión por la adhesión afectiva, pero también de encuadre de tal memoria mediante la oferta de un relato desde el punto de vista de los trabajadores (sobre este punto, ver Pollak, 1989). Se señala también que el objetivo de la publicación habría sido: “rescatar todo lo bueno que se ha hecho durante estos 10 años y procurar la educación y superación de todos quienes hacemos el Comité de Empresa INDUMESA”.

En el citado opúsculo, José nos cuenta sobre la trayectoria del colectivo de trabajadores de la fábrica donde trabajó tantos años, a través

17 Por tratarse de una publicación artesanal, el opúsculo mencionado no cumple con los rigores editoriales. La presentación, por ejemplo, carece de números de página.

de las breves páginas del folleto mimeografiado de papel periódico con tapas de papel de empaque, fotos de los dirigentes de la organización, y dibujos en blanco y negro que exaltan la lucha de los trabajadores mediante fuertes brazos que rompen cadenas, siluetas de luchadores con banderas (seguramente rojas) enarboladas, y un puñado de hombres de fenotipo indígena que levantan hoces y martillos.

En 1973-1974, en INDUMESA laboraban 30 trabajadores: soldados armadores de estructuras para cubiertas, constructores de carrocerías metálicas para buses, baldes para volquetas y vehículos pequeños, tapiceros, carpinteros, pintores. En aquella época la rama metalmecánica atravesaba un momento de prosperidad y “progreso”, mientras que algunos trabajadores, “los más dinámicos y conocedores del asunto de se dieron cuenta que era hora de organizarse para buscar mejores días [...]” (Comité de Empresa, 1986: 1).

La mayoría de los trabajadores, a la sazón, eran nuevos, y los antiguos que eran pocos, no tenían iniciativa para la organización. Evitaban, sobre todo “dar molestia alguna a los señores propietarios” (Comité de Empresa, 1986:1). Entonces, “los compañeros más conscientes” habrían comenzado a dar los primeros pasos para formar un sindicato, asesorados por un estudiante universitario de ideas socialistas. Los propietarios de la fábrica habrían reparado muy pronto en lo que estaba ocurriendo, despidiendo bajo acusaciones falsas a los activistas. Los obreros no se desalientan y continúan con el proceso organizativo, cuidando del secreto sobre las reuniones. De todas maneras, la información se filtra y los patronos intentan dividir a los trabajadores utilizando a los más antiguos. Afortunadamente, los activistas ya habrían acelerado el trámite de legalización del sindicato. Todo esto, durante 1975.

Un día viernes por la tarde estalló el problema, y los funcionarios de la empresa comienzan a llamar uno por uno a los directivos del sindicato. Después se supo que se trataba de un despido, por lo que el sindicato estaba liquidado. En precaución de nuevos intentos, es el mismo patrono, ya en 1976, quien toma la iniciativa de formar un “comité de empresa”, y recurre para ellos a los hombres de confianza. El 12 de agosto de 1976 el contador convoca a los obreros y les informa sobre la constitución del Comité de Empresa, agregando que en adelante tendrían “algunos beneficios sociales”, y procediendo a nombrar la directiva de la organización. Pero después de algún tiempo, “nuestros compañeros ya se iban dando cuenta del compromiso serio que teníamos los trabajadores y en cada reunión se veía un afán de ir avanzando en la organización”; así las cosas en una de las reuniones resuelven recurrir a un asesor sindical (Comité de Empresa, 1986: 4).

Entre las cosas “interesantes” que los trabajadores de INDUMESA tenían en aquella época eran los viajes gratuitos a Guayaquil “para

apoyar con todo entusiasmo al Deportivo Cuenca¹⁸ y así se nos fue el primer año de organización” (Comité de Empresa, 1986: 5). Durante el segundo año, los trabajadores habrían puesto a uno de sus representantes como secretario general (el anterior era uno de los funcionarios de confianza del dueño), y la organización comienza a “cambiar de rumbo”, porque se afilia a la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC). Es en aquel tiempo cuando empiezan a surgir “compañeros con ideas claras y un afán permanente de ir avanzando en la formación y capacitación sindical” (Comité de Empresa, 1986: 5). Es también cuando dos de los trabajadores viajan a Quito al primer congreso de la Federación de Trabajadores Metalúrgicos del Ecuador (FEDEMETAL), y a su retorno informan sobre la importancia del evento. Este acontecimiento habría incentivado a todos los trabajadores a avanzar en la lucha y a conocer las leyes laborales, a aprender cómo se debe discutir un contrato colectivo. Entonces los trabajadores comienzan a asistir a todas las jornadas de capacitación que realizaba la central sindical. Luego este esfuerzo da los primeros frutos, y se firma un contrato colectivo en 1978 que habría conquistado “ayuda para el local sindical y financiamiento para el deporte, entre otras” (Comité de Empresa, 1986: 5). A finales de la década de los setenta los obreros se involucraron más y más en distintos eventos: seminarios, congresos nacionales y provinciales. Esos años estuvieron llenos de dificultades y tensiones, pues el gerente no cumplía con el contrato colectivo, lo que dio paso a un período de intensos reclamos. Los obreros entonces toman la decisión de luchar “en contra de la actitud de la patronal y [...] en contra del régimen demócrata-cristiano que día a día imponía medidas en contra del pueblo ecuatoriano” (Comité de Empresa, 1986: 10).

Ya en los primeros años de la década de los ochenta, la organización logra “los más altos niveles” de participación y se involucra en las jornadas de mayo y octubre de 1982. También de este período data la primera actitud de protesta en contra del patrono frente al incumplimiento de algunas obligaciones contractuales, lucha que culmina con la firma del cuarto contrato colectivo. De la época data también el nombramiento de la Virgen María Auxiliadora como Patrona de la organización. Avanzando hacia la media década se continúa con la persistente presencia en las huelgas nacionales del FUT, y la organización decide reglamentar sus actividades. Fruto de ello fue “un reglamento interno de la organización, las ayudas por enfermedad para algunos compañeros y se inició un archivo de documentos”. Estos años, 1984 y 1985, son recordados también “por el interés que el compañero [...]

18 El principal accionista de la empresa fue dirigente deportivo; el estadio de la ciudad lleva su nombre.

puso en dar mayor realce a las festividades de Nuestra Patrona y fue en su época que se corona a la Virgen María Auxiliadora en una gran ceremonia” (Comité de Empresa, 1986: 11). Los obreros de INDUMESA recuerdan a 1985 como el año en que se cometió una gran injusticia, pues el secretario general del Comité reclamó que se le pague el salario estipulado en el contrato colectivo. La presión ejercida por el dirigente habría provocado su despido, bajo el argumento de atrasos y salidas sin permiso; acto seguido los trabajadores respondieron presentando un pliego de peticiones con trece puntos. La empresa no aceptó la solicitud, por lo que los trabajadores iniciaron una huelga que dura 23 días, en respaldo al secretario general, a quien finalmente, no se le reintegra a laborar. No obstante, el balance de esta huelga se considera positivo, pues se había logrado la solidaridad de otras organizaciones a nivel local y nacional, de los familiares de los huelguistas, de artistas; la huelga había sido beneficiosa para los trabajadores, pues les permitió medir “el grado de combatividad y disciplina de los compañeros trabajadores de INDUMESA” (Comité de Empresa, 1986: 12).

Después de esto, los trabajadores perdieron el recelo o duda ante un conflicto colectivo. También se hizo realidad la tabla salarial por rama de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad industrial, además de que, a los pocos días de la huelga, el gerente general fue cambiado. Se inicia, asevera José, otra época del Comité de Empresa, pues además la organización ha desarrollado un alto espíritu de solidaridad y compañerismo, e iniciado la publicación del periódico *La verdad obrera*.

Hasta aquí el relato. En el mismo percibimos varias líneas ideológicas o, mejor, estratificaciones superpuestas e imbricadas. La historia del Comité de Empresa de INDUMESA nos ayuda a reflexionar, nuevamente, sobre la presencia de corrientes subterráneas corporativas y prácticas mutuales, en el seno de la vertiente sindical clasista, de tal manera que sus símbolos de combate (banderas rojas, puños apretados, cadenas rotas) ocultarían, más bien, la idea de rebeldía en pro del bien público, antes que el anhelo de una reestructuración del modelo de sociedad. Agregaríamos, además, que en este caso observamos la existencia de un componente religioso, siendo probable la difusión de tales prácticas y concepciones en una gran cantidad de organizaciones. En tal sentido, si reparamos en el simbolismo laico de la Virgen María Auxiliadora, podemos quizá derivar de él la fuerza de las metáforas familiares (hermandad, maternidad), y de la búsqueda de protección y calidez como contexto de la construcción de la organización.

Resulta interesante también la búsqueda de consolidar la identidad colectiva a través de la gestión de la memoria y la producción de un relato autorizado, pues el autor del folleto pone énfasis en conceptos como la combatividad, la alteridad del patrono, la fraternidad y la

ayuda mutua. Notemos que los tres primeros elementos mencionados serían plenamente compatibles con la perspectiva socialista/clasista, aun cuando, claro, en discursos políticamente diversos. Serían, por lo tanto, aquellos los ejes ideológicos que remiten a valores cardinales. Valores que habrían permitido la confluencia de la dirigencia nacional, local y de los miembros de base. Sin una práctica de inspirada en tales valores no hubiese sido posible que, a la par con el corporativismo, se vigorizase el clasismo-izquierdismo. Y dado que las fronteras que separan ambas vertientes no son rígidas, muchos sujetos oscilaban entre una y otra, con lo que se volvía permanente la simbiosis entre religión y política, creando el sustento para las identidades colectivas de la inconformidad obrera.

Llamo también aquí la atención sobre la importancia de la noción de “pueblo” como referente de los esfuerzos colectivos plasmados en las huelgas, un “pueblo” que se enfrenta al Estado y, siguiendo la retórica de la izquierda, “a la clase dominante que detenta el poder”. Es aquí donde se inscribe de manera implícita la presencia de lo que hemos llamado “corporativismo universalista”: una cultura política anclada en la “estadofobia” y, al mismo tiempo, en una concepción del Estado como fuente por excelencia del “bien público”, en el clamor de justicia social “para todos” frente a quienes detentan el poder macrosocial. Cultura “de las bases”, por lo demás, que no pretende, más allá de la retórica revolucionaria, rebasar el marco de lo realmente existente; una cultura que es movilizada eventualmente por la “economía moral”, y que luego de trastornos de diversa duración dependiendo de la magnitud de la violencia política y económica de las elites, vuelve a su rutina cotidiana y recupera sus hábitos y creencias.

En suma, el llamado “sindicalismo clasista” sería un complejo en el que se superponen ideologías de diverso signo y origen, a las que acompañan en cada nivel de interlocución diversas prácticas políticas. Complejo que resultaría “izquierdizante” con cierta consistencia solamente al nivel de las cúpulas del FUT y las centrales sindicales nacionales, que eran las instancias visibles y audibles en las huelgas –momentos cúspide de las confrontaciones y/o negociaciones con el Estado–. Es la relación con este que la acción sindical asume un carácter corporativo-universalista laico, pues en mi criterio muchos de los beneficios que la movilización sindical lograba arrancar al Estado (por ejemplo, congelamiento de tarifas de transporte y servicios o precios del gas) y, por su intermedio, a la parte patronal; beneficiaba, hemos dicho, también a sectores no obreros vinculados al Estado. Algunos de estos beneficios se extendían, asimismo, a amplios sectores populares. Ya en los niveles estatales intermedios, por ejemplo, provinciales, la ideología y prácticas sindicales irían distanciándose del discurso nacional, doctrinariamente

te informado, y cobran un carácter más particularizante, aunque sin desechar el componente universal-corporativista. En los espacios locales e inmediatos de agremiación, los miembros de base recrean entre sí relaciones cara a cara impregnadas eventualmente de mutualismo, se encapsulan en las demandas particularistas en la relación con la patronal, y la organización se caracterizaría por lo que denominaríamos “corporativismo particularista no secularizado”.

En síntesis, si imaginásemos al sindicalismo de la vertiente clasista de la manera arriba descrita, es decir, como constituido por efectos superpuestos de representaciones, ideologías y prácticas de diverso origen en varios niveles y ámbitos societales, y realizásemos un corte vertical con el fin de identificar las diversas estratificaciones ideológicas, podríamos ver que el discurso universalista y laico se va diluyendo gradualmente, desde los altos niveles de negociación, con el Estado, hasta las instancias jurídicas y patronales localizadas, lo propio ocurre con el efecto político gracias al carácter despolitizado de las prácticas de negociación. Con todo, es una constante el tenor “antisistémico” del marco ideológico general: su inspiración sería marxista-leninista (ver Cuadro 8 del Anexo).

LA COORDINADORA DE MOVIMIENTOS SOCIALES ¿UN POSMOVIMIENTO?

Hemos analizado algunos ejes ideológicos del sindicalismo de los años setenta y ochenta, que irradiaría su influencia hacia la organización sindical clasista que sobrevive en los años noventa. ¿Cuál es la distancia ideológica que separa a este del nuevo sindicalismo de los años noventa, inscrito en la CMS? ¿Cuáles los contenidos de la protesta? Veamos lo que ocurriría al menos en una de sus vertientes, la del sindicalismo estatal, a través de un texto de Ramiro Galarza, dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, incluido en la obra colectiva *Los encadenados del oleoducto* (Galarza, 1996).

Galarza relata las vicisitudes de la presencia de los sindicatos del sector estatal en la vida pública, y específicamente de los trabajadores petroleros y los eléctricos. Dos habrían sido los ejes de la lucha librada a mediados de los años noventa: el primero, la brega contra de la supresión del derecho a la sindicalización y otros derechos sociales y, en segundo lugar, la oposición a la ampliación del SOTE y su licitación. En lo concerniente al primer eje, los trabajadores petroleros, buscando presionar a su patrono inmediato, el Estado, habrían vuelto sus ojos a un lugar donde podían ser escuchados por alguien, en la defensa de sus intereses, optando por la negociación parlamentaria, con proyección a inscribirse políticamente y ocupar el vacío dejado por el FUT: “El país ganaba un nuevo actor social y una nueva fuerza política con capacidad

de incidir en los escenarios coyunturales” (Galarza, 1996: 134). En cuanto al segundo, al tratarse de un asunto estratégico para el desenlace de la gestión de Durán-Dahik, el gobierno perseveraría en su propósito, de ahí que los trabajadores petroleros tuvieran que radicalizar la medida anunciando que llegarían hasta las últimas consecuencias, y ello se expresó en el nombrado encadenamiento simbólico al oleoducto.

Independientemente del sentido político y los efectos simbólicos buscados, me pregunto: ¿no está, por ventura, intentándose recapitular el mismo papel social del FUT, solo que ahora con un lenguaje político diferente, desde una nueva autoadscripción, a la altura de la época “post” muro de Berlín y sin la incómoda presencia de los referentes partidarios de izquierda? ¿No se estaría reforzando una orientación más bien neocorporativista de la presencia sindical en el ámbito de la política nacional, en la medida que se rompen las mediaciones político-partidarias antaño existentes entre las instancias obreras y el Estado? Reiteramos que hablar de corporativismo o neocorporativismo no tiene aquí un sentido peyorativo, sino que implica apenas la designación de las prácticas del FUT, bajo un lenguaje remozado. Por ejemplo, la comprensión que tiene Narváez sobre el papel del Estado en la nueva situación de la crisis y el ajuste radica en que el Estado debería actuar en concordancia “[...] a su naturaleza: poner en vigencia la práctica del Bien Común”, pero en realidad, el Estado en su actuación no ha hecho más que “poner el ‘interés general’ en armonía con el interés de esos grandes grupos, con el interés y la lógica del capital [...]” (Narváez et al., 1996: 24).

De modo que el Estado está de vuelta, y sigue siendo el centro de referencia de las demandas sociales. El tenor de tales demandas parece indicar que, en la fase “post”, las fronteras entre la “estadofobia” y la “estadolatría” son igualmente o más difusas que antes, en la era “tradicional”. De vuelta está también la idea del bien común, en desgarradora contradicción con la crítica, que los dirigentes del nuevo sindicalismo formulan, al sistema capitalista y en particular al neoliberalismo (ver, por ejemplo, Narváez et al., 1996: 25).

En cuanto al contenido de la protesta y de la oposición a las privatizaciones, este se acompaña con lo que Ibarra denominara “el espíritu del Alto Cenepa”, que perduraría inclusive en la impugnación a Bucaram en 1997:

Estábamos cerca de bajar los *switchs* de las grandes centrales hidroeléctricas y disminuir carga en las áreas de producción, transporte, refinación y exportación de petróleo. La radicalización nos hubiera llevado a una confrontación innecesaria con nuestras Fuerzas Armadas, con quienes

compartimos el vehemente deseo de fortalecer el sector estratégico de la economía.

La guerra del Cenepa había unido al pueblo y al ejército, la participación de los trabajadores energéticos fue particularmente digna en este momento (se llegó a producir gasolinas de helicóptero, por ejemplo), y el país fue abastecido de forma extraordinaria en combustibles y electricidad. El Ecuador funcionó como un reloj. Nuestro pueblo se crece en momentos difíciles, si logramos unirlo por grandes causas podemos ganar el cielo.

La fuerza de los grandes cambios está en el pueblo, en sus movimientos sociales, en sus diversas formas de asociación, de lucha, de sobrevivencia. No era adecuado fisurar nuestra relación con las Fuerzas Armadas. Los privatizadores hubieran ganado espacio para el despojo de los bienes nacionales (Galarza, 1996: 125).

Tras los bastidores verbales, a mi criterio, lo que aquí se expresa con claridad es la idea de nación; y en esto habría un claro desencuentro con el sindicalismo de los años setenta y ochenta, orientado, más bien, por las nociones de “internacionalismo” (proletario) y de “pueblo”. Ahora en cambio se expresa la idea de “nación” y de “patria”, esta muy acenuada también en la protesta de 2002, contra la privatización de las comercializadoras de energía eléctrica. (“La Patria no se vende, la Patria se defiende” coreaban insistentemente los trabajadores de la energía eléctrica participantes de la mencionada Asamblea Cívica Nacional de marzo de 2002).

La noción de “pueblo”, pese a que se encarna en un enunciado, sería secundaria frente a la de “nación”, que está más bien implícita como un gran telón de fondo; el “pueblo” existiría en su relación con una “comunidad imaginada” sintonizada en la defensa del territorio y sus riquezas, sosteniendo más bien la legitimación del sindicalismo público (algo así como “nosotros: el pueblo”) frente a una noción mayor y más abarcadora, la de la “comunidad imaginada”, representada, ahora, en una confluencia política de tipo “frente popular”, en la convergencia de todas las instancias sindicales opositoras, organizaciones indígenas y campesinas, partidos políticos (y/o sus remanentes o refundaciones) de centroizquierda, colegios profesionales y, por último, “los empresarios honestos” el Foro Ecuador Alternativo –instancia empresarial crítica a la subasta de los bienes públicos y al modelo de ajuste (¿la ansiada durante décadas “burguesía nacional”?).

Habiendo planteado dos nociones distintas que servirían como relatos aglutinantes en la protesta de los años ochenta y en la de los

años noventa, conviene que establezcamos sus especificidades. La noción de “pueblo” se originaría en la “política de la calle” y aglutina un “nosotros” en torno a la centralidad de la “clase”, grupalidad que se caracterizaría, ciertamente, por el arraigo en un territorio, pero, fundamentalmente, por una condición social; en tal sentido se construye la alteridad del “no-pueblo”, que gruesamente identifica a los “ricos”, y quizá a sectores pudientes de la población blanco-mestiza. Desde tal perspectiva estaría implícita una condición étnica homogénea; en todo caso, no se enfatizaría en las diferencias, y el “otro”, aunque también es inter y transnacional, está claramente identificado dentro de las fronteras territoriales. Ya el origen de la idea de “nación” dominante en los años noventa –aun cuando no siempre se la enuncie de manera explícita– tendría su origen en los relatos patrios inculcados en la escuela, con anclaje simbólico en los héroes y gestas independentistas, así como en la idea de mutilación territorial en los conflictos fronterizos, básicamente, con el Perú. La grupalidad que se cohesionaría en torno a estos relatos es ampliamente policlasista, abarcando, por paradójico que parezca, también a la pluralidad étnica. En tal sentido, las alteridades serían también diferentes en comparación con las anteriores: el “otro”, la “no-nación”, proviene de las exterioridades de las fronteras patrias, sean personas, instituciones, ideas, pero sobre todo políticas de enajenación y desmantelamiento de lo que forma parte del “hogar” patrio, sea territorio, sea patrimonio (este último, un sentido muy importante para la movilización sindical de los años noventa). En ese contexto, el “espíritu del Alto Cenepa” impregnaría tanto la lucha por la integridad territorial como el combate a las privatizaciones. Por último, hay que anotar la importancia de los grandes medios de comunicación, y sobre todo de la televisión, como formadores de las identificaciones de un “nosotros” policlasista y poliétnico, de un imaginario de existencia simultánea de los diversos frente a alteridades externas –una variante de las tendencias centrípetas de las que habla Hall (1997) como constitutivas del proceso de globalización–. Es decir, de un sentido de pertenencia y demanda de derechos sociales y políticos en tanto miembros de la “comunidad imaginada”; los medios de comunicación, en ese sentido, coadyuvaron a la experiencia de la unidad y confluencia física de la nación en el torrente ciudadano que impugnó a Abdalá Bucaram.

La idea de la “comunidad imaginada”, el lugar físico de existencia de esta y su patrimonio, al igual que la inmoral transgresión del sagrado recinto patrio (cuya defensa, en última instancia, queda en manos de las Fuerzas Armadas) que pretende consumarse a través de la venta de las empresas estatales, estaría también aquí, al igual que en instancias del movimiento indígena, como metalenguaje que confi-

gura el sentido de la insurgencia. Así, el sentimiento de pertenencia a la “comunidad imaginada” y el posicionamiento frente a las acciones del Estado en la venta de patrimonio público serían el sustento de la identidad ciudadana que se encuentra en los entretelones de la protesta. Tal *ethos* ciudadano se sostendría también en una disolución de los trabajadores petroleros y eléctricos en las capas medias de la sociedad ecuatoriana, en el plano de los ingresos y remuneraciones altos, pues se trata en muchos casos de profesionales de alto nivel. Y es desde esa posicionalidad que participan en las movilizaciones de febrero de 1996 por la impugnación de Bucaram, protesta a la que se le ha dado explícitamente el adjetivo de “ciudadana”.

Es importante también destacar que la moral tiene un lugar importante también en las definiciones del sindicalismo de los años noventa. Y ello se expresa en la asimilación de la privatización a la corrupción, tópico dominante en casi todos los discursos, desde el constitucional hasta el de la oposición, y presente, en una u otra formulación, en las alocuciones de dirigencias y en las consignas de los miembros de base. Por contraste, quienes se oponen a la privatización automáticamente pasan a la orilla de los “honestos”, como es el caso de Luis Maldonado Lince, dirigente del Foro Ecuador Alternativo.

CONCLUSIONES

Durante los últimos años han estado presentes los clamores por las insuficiencias de la protesta sindical. Insuficiencias de revolucionarismo para la izquierda política, extremismo para la crítica oficialista. La crítica académica, mayoritariamente, prefirió silenciarlo. Y todo esto, en circunstancias de una flexibilización y tercerización de la fuerza laboral, en las que se desvanecían no solamente los derechos conquistados en décadas de lucha, sino también la organización que, pese a todo y por supuesto al carácter táctico de la movilización, había logrado contrarrestar los efectos del desmantelamiento de las políticas sociales y el frágil acceso a derechos sociales.

Entre esos Escilas y Caribdis, el análisis de los procesos políticos internos del sujeto obrero-sindical, así como sus impactos sociales parecían reposar confiablemente en la caja negra del silencio y el ostracismo. En todo caso, se sabía que habíamos entrado en la era “post” movimiento, y que no había por qué revivirlo. Una mirada analítica “post- Restauración”, y “post” años noventa debe sustentarse en la demolición de la dicotomía “nuevos actores sociales” versus “actores sociales tradicionales”, tanto como en el esfuerzo por recuperar la perspectiva de la presencia obrera como parte constitutiva de la producción de una nueva democracia, en el contexto del ajuste y precarización de la sociedad.

Al analizar, en estas páginas, la ideología de la protesta obrero-sindical en el Ecuador a partir de la segunda mitad de los años noventa, desde una entrada por su vertiente azuaya, hemos planteado que resulta inexacto denominar “clasista” a aquella corriente sindical cuyos líderes explicitaron un tenor socialista en sus discursos públicos. Hemos sostenido, más bien, el carácter “universal-corporativista” de la inspiración ideológica, como así también de las realizaciones político-sociales. De esa manera, consideramos que el análisis nos ha ayudado a escapar de la trampa de las alternativas “sindicalismo revolucionario/sindicalismo reformista”, o “economicismo/politización”. Dicho carácter corporativo-universalista, junto con las luchas de otros sectores movilizados, es precisamente lo que ha permitido preservar posibilidades mínimas de vida para amplios sectores sociales; pero más que eso, ha posibilitado una resistencia a las realizaciones neoliberales inédita en América Latina, y quizá, hasta el momento, guardarnos de sus consecuencias extremas, aun cuando no ha logrado contrahegemonizar la instauración misma del modelo.

Los años noventa han dejado una reflexión fundamental: la necesidad no solamente de retomar una construcción sobre nuevas bases democráticas, sino también la recuperación simbólica y discursiva del sujeto obrero, de su autoestima pública. No basta con tener contrapropuestas para la reconstrucción de la sociedad, parece importante crear condiciones para la recomposición de las identidades fracturadas, que serán finalmente el fermento de dicha reconstrucción. En ese sentido, se encuentra pendiente una tarea de largo aliento en el plano de lo simbólico, para remover representaciones que sustentan opciones político-electorales personalistas. En ese terreno, al tratarse de estructuras ideológico-emotivas profundas, la posibilidad de neutralizar sus efectos pasaría por la renovación de una propuesta “creíble” y posible de sociedad, por una parte, y de desarrollar procesos de deconstrucción de las representaciones y *habitus* de género, junto con el reordenamiento democrático de las organizaciones obreras existentes.